

Observatorio metropolitano

Manifiesto por Madrid

Crítica y crisis del modelo metropoltano

traficantes de sueños



Desde sus inicios **Traficantes de Sueños** ha apostado por licencias de publicación que permiten compartir, como las Creative Commons, por eso sus libros se pueden copiar, distribuir, comunicar públicamente y descargar desde su web. Entendemos que el conocimiento y las expresiones artísticas se producen a partir de elementos previos y contemporáneos, gracias a las redes difusas en las que participamos. Están hechas de retazos, de mezclas, de experiencias colectivas; cada persona las recompone de una forma original, pero no se puede atribuir su propiedad total y excluir a otros de su uso o replicación.

Sin embargo, «cultura libre» no es sinónimo de «cultura gratis». Producir un libro conlleva costes de derechos de autor, traducción, edición, corrección, maquetación, diseño e impresión. Tú puedes colaborar haciendo una donación al proyecto editorial; con ello estarás contribuyendo a la liberación de contenidos.

Puedes hacer una donación
(si estás fuera de España a través de PayPal),
suscribirte a la editorial
o escribirnos un mail

traficantes de sueños

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y sólo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro.

Omnia sunt communia!

Observatorio Metropolitano es un proyecto que reúne a diversos colectivos multidisciplinares en un espacio de reflexión sobre los fenómenos de transformación que caracterizan a las metrópolis contemporáneas. La intención es elaborar investigaciones militantes que aporten el conocimiento y las herramientas políticas necesarias para enfrentarse a estos enormes procesos de cambio. Construir un espacio de comunicación entre militantes, técnicos e interesados, y sobre todo entre pequeños proyectos (o embriones de proyectos) de investigación militante que se dan ya en la ciudad y en los movimientos sociales.

1ª edición: 2000 ejemplares
Mayo de 2009
Título:
Manifiesto por Madrid.
Crítica y crisis del modelo metropolitano
Autoría:
Observatorio metropolitano
Maquetación y diseño de cubierta:
Taller de diseño Traficantes de Sueños
taller@traficantes.net
Edición:
Traficantes de Sueños
C/. Embajadores 35
28012 Madrid. Tlf: 915320928
e-mail:editorial@traficantes.net
http://traficantes.net
Impresión:
Queimada Gráficas.
C\. Salitre, 15 28012, Madrid
tlf: 915305211
ISBN: 84-96453-40-1
Depósito legal:

Manifiesto por Madrid
Crítica y crisis del modelo metropolitano

Observatorio metropolitano

Índice

Este Manifiesto se ha escrito con un solo propósito: denunciar la destrucción de la bases elementales que hacen posible la vida en común en una ciudad como Madrid. El espectacular crecimiento económico de la región durante la última década ha venido de la mano de una constante dilatación de las desigualdades sociales y del expolio y privatización de lo que propiamente podríamos llamar nuestros bienes comunes: la sanidad, la educación, los espacios públicos, el territorio, el medio ambiente, el agua... El nuevo contexto de crisis manifiesta, de la forma más aguda, que el «modelo Madrid» de crecimiento sólo es posible a costa del bienestar de la mayoría y de la igualdad de todos.

Este Manifiesto pretende contribuir así, aunque sea mínimamente, a convertir la crisis en una posibilidad para pensar y devolver a la ciudad una nueva oportunidad. El acicate para una apuesta por la innovación de base y en pro de instituciones que sirvan de soporte para el desarrollo de una democracia urbana de nuevo cuño.

En este texto se ha prescindido de notas, referencias y documentación accesoria. A fin de ampliar la información o profundizar en algún aspecto se recomienda la visita de la web: www.observatoriometropolitano.org y la consulta del libro Observatorio Metropolitano, *Madrid ¿La suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2007 (http://traficantes.net/index.php/trafis/editorial/ catalogo/utiles/madrid_la_suma_de_todos_globalizacion_territorio_desigualdad).


La Comunidad de Madrid, un gran lugar donde nacer.
Donde vivir.
Gracias a que contribuyes con tus impuestos tenemos los mejores
Servicios Públicos de Europa.
Comunidad de Madrid

I. Madrid, ciudad global

En donde se cuenta el ascenso de Madrid a la excelsa categoría de «ciudad global» y se cuestiona el precio que se ha pagado por este «progreso»

El enorme cartel publicitario de un bebé durmiendo plácidamente nos devuelve la imagen de Madrid como «Un buen lugar donde nacer. Donde vivir»; en el que, gracias a nuestros impuestos, disponemos de «los mejores Servicios Públicos de Europa». Una ciudad que «avanza más», «comprometida» con su propio progreso, con «el mejor metro del mundo». Una ciudad prometedora: primero «capital olímpica 2012», y ahora «ciudad aspirante 2016». Anuncios y neones que nos devuelven una imagen de orgullo cívico en una ciudad que siempre ha sido más bien anónima y «cutre», residiendo allí precisamente algo de su encanto.

A pesar de su carácter panfletario, esta propaganda deja entrever algo de verdad sobre la evolución reciente de la ciudad. En sólo una década, Madrid ha crecido en más de un millón de habitantes, una poderosa dinamo económica ha permitido generar otro millón largo de empleos y sus límites geográficos se han extendido más allá de los márgenes de la comunidad autónoma, invadiendo las zonas limítrofes de las provincias fronterizas. Tanto en términos demográficos como económicos, Madrid es la tercera metrópolis europea; su escalada de

posiciones en el ranking de las regiones del continente ha sido impresionante y hoy se sitúa ya entre las 20 primeras (de un total de 240) en renta per cápita. Es, además, la sede del cuarto mercado bursátil de la Unión, el cuarto aeropuerto por volumen de pasajeros y el segundo centro ferial del mundo, sólo detrás de Londres. En el marco estatal, Madrid ha dejado completamente atrás a sus posibles competidoras, superando en crecimiento a Cataluña, País Vasco, Valencia o Andalucía. En pocas palabras: los grandes *hits* macroeconómicos, el desarrollo de sectores estratégicos y la concentración de grandes empresas parecen ser siempre prerrogativas de este viejo «poblachón manchego».

Pero, ¿a qué debemos este éxito? ¿Sobre qué modelo de ciudad se ha cimentado? Las respuestas apuntan en dirección casi contraria a la de los rótulos luminosos. El espectacular crecimiento de Madrid, la considerable creación de empleo, la nueva proyección global de la ciudad... son a los ojos de nuestra queridísima clase política la expresión viva del éxito de un modelo social abierto. Un modelo que genera riqueza, crea empleo y se desperdiga en una lluvia de oportunidades sociales, incluso para una población extranjera que en 2010 se acercará al millón, y que por mor de esta bonanza económica, radicalmente democrática, se han convertido en los «nuevos madrileños». Las recetas de este éxito (reza la cantinela) han sido una economía abierta a las ventajas de un mundo global y una «impecable» gestión económica. En definitiva un liberalismo responsable que ha hecho de Madrid la «nueva frontera», donde cada cual conseguirá medrar y mejorar sus condiciones de vida.

Más allá de que la evolución reciente de la ciudad se explique, tal y como luego se verá, por factores mucho más complejos que los que se pueda atribuir la clase política madrileña, la pregunta y la sospecha es si este modelo de «éxito» no se ha producido (no se está produciendo) a costa de un expolio generalizado. Expolio de aquello que todavía podríamos llamar, con una vieja palabra, «lo común»: los bienes sociales elementales. Bienes como la capacidad de decidir colectivamente sobre el futuro y el modelo social y económico; bienes comunes como un

mínimo de renta para todos a partir de un reparto equitativo de los recursos (especialmente frente a una situación de concentración abusiva de la riqueza en un sector social minoritario); bienes comunes como unos servicios públicos que si bien pueden ser mejorables (a partir sobre todo de su democratización) son ahora pasto de la privatización y de la transformación en nichos de negocio subvencionado; bienes como la posibilidad de disponer de un medio ambiente sano, o cuando menos no venenoso; bienes como la vivienda, la salud, la educación, cada vez más imposibles, en términos de calidad, para una parte mayor de la población. En este sentido, hablar de crisis en Madrid, una crisis que seguramente amenazará su fulgurante trayectoria, es hablar de crisis *antes* de la crisis; es hablar de las contradictorias consecuencias de un determinado «modelo social y urbano». A la luz de este prisma, la crisis, declarada ya como tal por la depresión de las variables económicas, es sólo la última línea de tendencia que afilará los rasgos más agresivos del modelo por medio de la aceleración de las máquinas de desigualdad y de la liquidación de los pocos bienes colectivos que aún resten. Todo ello a costa de pasar por la trituradora, literalmente, a los sectores más desfavorecidos.

Pero vayamos por partes.

La nueva centralidad de Madrid

O de cómo Madrid se ha convertido en un gran centro financiero y empresarial global, paraíso de una poderosa oligarquía, con la inestimable colaboración de las instituciones públicas y sus audaces medidas de redistribución a favor de los de arriba…

Ciertamente Madrid no tiene un diseño. No tiene un diseño porque su pauta de desarrollo no obedece a un plan confeccionado por astutos e inteligentes políticos. Y no

tiene un diseño porque no puede ser imitada nada más que por un puñado de ciudades con unas características y coyunturas similares, ninguna de ellas por cierto en España. Madrid sin embargo tiene un patrón que le asemeja a otras grandes ciudades del mundo, es lo que se llama una ciudad global.

Las ciudades globales, grandes beneficiadas de la globalización, han construido su fortuna sobre una concentración de ciertos sectores estratégicos en las complejas secuencias de la producción transnacional. Se trata, principalmente, de sedes y oficinas centrales de grandes empresas que operan a escala multirregional —y que pueden acumular una riqueza mayor que la de un país de tamaño mediano—, y de grandes mercados financieros en los que se negocian ingentes cantidades de dinero (¿podríamos decir de todos?) en forma de acciones, bonos y derivados financieros. También se trata de todas las infraestructuras que permiten y facilitan este movimiento global de información, órdenes, dinero y personas, como los aeropuertos internacionales, los recintos feriales, las plataformas logísticas, los hoteles de cuatro y cinco estrellas, etc.

En todos estos sectores Madrid es ya una referencia. De hecho, si hace tan sólo veinte años hablar de multinacionales españolas podía parecer un chiste —cuando España ingresó en la Comunidad Europea se podía ver el rótulo de «se vende» por todas partes—, hoy son ya 30 las empresas de origen español que se encuentran entre las 2.000 mayores del planeta, y algunas de ellas están entre las diez primeras de su sector. La privatización de los grandes monopolios energéticos y de telecomunicaciones durante la década de los noventa nos ha hecho testigos del nacimiento de gigantes como Telefónica, Endesa, Repsol, Cepsa o Unión Fenosa que, además, han conservado su posición de privilegio en los mercados locales. De otra parte, la especialización en el sector inmobiliario y la vocación «constructora» de España —empeñada en tener más kilómetros de autovías que cualquier otro Estado europeo— ha elevado a alturas colosales a un puñado de constructoras, al tiempo que la liberalización bancaria y el

favoritismo público se ha traducido en el nacimiento de dos grandes tiburones financieros: el Banco Santander y el BBVA.

Por supuesto, esta *spanish legion*, como la bautizaba recientemente *The Economist*, siempre amparada por el paraguas del Estado y apoyada por la transferencia directa o indirecta de dinero público, sólo ha podido adquirir dimensiones planetarias con la compra de otras grandes empresas públicas privatizadas; primero en América Latina, reinventando así una relación neocolonial que se había perdido en el primer tercio del siglo XIX, y más tarde en Europa, Estados Unidos e incluso en Asia Oriental.

Madrid, capital del Estado, ha sido la gran beneficiada de esta globalización ventajosa: convertida en sede de la mayoría de estos nuevos gigantes globales (23 de las 30 primeras empresas españolas tienen su sede en esta ciudad, que es ya la octava del mundo en número de cuarteles generales de grandes empresas) y en nuevo centro de operaciones de los flujos financieros y decisionales mundiales, brilla como una estrella emergente en el firmamento global, al lado de otras grandes urbes europeas como París, Londres o Milán.

En este tablero de la «libre competencia» que supuestamente acompaña a la globalización, parece que la «mano invisible del mercado» ha decidido premiar así a los monopolios y oligopolios naturales, sostenidos y alimentados por las transferencias de dinero público, que no a las pequeñas empresas eficientes y dinámicas que decidieron optimizar sus recursos y apostar por la inversión productiva y la innovación tecnológica. Lejos pues de las retóricas neoliberales, la suerte de Madrid ha tenido que ver principalmente con la posición ventajosa del país, protegido por el euro de las fluctuaciones monetarias, y con una política de privatizaciones y de promoción pública de determinados sectores económicos como el de la construcción.

A escala exclusivamente regional, el resultado de esta transformación ha sido el nacimiento de una nueva oligarquía urbana «llamada» a convertir su cuna de nacimiento en

el palacio de exposiciones de su poder recién adquirido. Así lo manifiestan los nuevos rascacielos y espacios representativos que han proliferado en los últimos años en los grandes ejes simbólicos de la ciudad. Una oligarquía que tampoco renuncia a utilizar la ciudad como su propio *business* (¿por qué no?), elevando el espacio urbano a un puesto relevante dentro de sus carteras de activos. Aquí, otra vez, el apoyo en los poderes públicos ha sido inestimable, ¿cómo no apoyar, incentivar, a nuestros forzados campeones internacionales? ¿Cómo no convertir la ciudad en un gran monopoly plagado de ambiciosas obras públicas, aunque sean de dudosa utilidad socioeconómica (M-30, M-45, radiales, todas ellas en beneficio de grandes constructoras y entidades financieras) y billonarias operaciones de recalificación de suelo en favor de un puñado de agentes corporativos (Torres del Real Madrid, Valdebebas, Operación Chamartín)?

El «interés» corporativo por Madrid ha transformado la ciudad, de este modo, en una máquina de crecimiento, perfecta y minuciosamente articulada, o en otras palabras, en un inmenso terreno abonado para el beneficio privado a costa del suelo, los recursos y los servicios colectivos. Un caladero tan rico en especies y aprovechamientos que, tal y como luego se verá, el agotamiento relativo de las plusvalías inmobiliarias podrá ser compensado, gracias al inestimable apoyo de una administración «liberal», por una nueva ola de privatizaciones en sectores por los que no podremos dejar de pagar: servicios urbanos, servicios sociales y sanidad.

Un paisaje social cada vez más polarizado

Donde se explica que la nueva ciudad global ha generado una gran desigualdad social y se nos hace saber que «el trabajador» ya no es, mayoritariamente, un señor español con mono de trabajo, sino una mujer latinoamericana o africana que trabaja como camarera o asistenta o, lo que es más común, hoy como camarera, mañana como asistenta y pasado mañana en nada.

En los años ochenta, con los barrios devastados por la heroína y las fábricas vaciadas por la crisis, ¿quién habría soñado que Madrid podría llegar a ser una capital mundial? ¡Qué incontables beneficios se podrían derivar de esta nueva centralidad económica!

Lejos, sin embargo, de la imagen de la tierra de las oportunidades y de la movilidad social a la que tópicamente se recurre cuando se habla de un éxito urbano inspirado en políticas neoliberales, el espectro social de Madrid muestra una persistente tendencia tanto a producir nuevas desigualdades, como a reducir a una parte considerable de la población a nichos de empleo deprimidos e infrapagados, de los que es suficiente tener oídos para saber lo difícil que es escapar de ellos.

Esta tendencia parece inscrita en la actual estructura productiva madrileña: así, si mientras en un extremo se genera una enorme masa laboral precarizada y pagada de forma miserable, en el otro se muestra la cara triunfante de la globalización. Una nueva nación de directores de empresas y profesionales de alta cualificación, de ejecutivos, economistas, abogados, publicistas, comunicadores, etc... que cada día cabalga en coches de gran cilindrada desde sus apartamentos y chalets en los suburbios hacia los centros financieros y empresariales. Es lo que en otra parte denominamos *global class*, un estrato social que vive en ese territorio, a un tiempo tan abstracto y tan concreto, que es el planeta Tierra. Se trata de un segmento de super-asalariados con remuneraciones de 60.000 a 80.000 euros anuales como mínimo, alcanzando en ocasiones cifras 20 o incluso 100 veces mayores, y que en la estructura laboral de la ciudad no representan más del 15 % de la población activa. Su retribución y su categoría viene determinada por su función: organizar, chequear, adaptar y engrasar el aparato decisional de las grandes empresas. En este grupo se debieran incluir, naturalmente, los miembros de los consejos de dirección de grandes empresas así como todos los altos cuadros de las mismas. Sin embargo, la *global class* comprende también a un gran número de técnicos y especialistas a los que las firmas recurren para tareas de asesoramiento

—consultorías financieras, legales, técnicas o sociales— o para actividades como la publicidad o los desarrollos informáticos. Es lo que en la jerga especializada se conoce como «servicios avanzados a la producción» y que, a día de hoy, supone el principal nicho de empleo cualificado de la región madrileña.

Por contra, en el otro polo de la cadena productiva, la globalización muestra su reverso oscuro. Del millón largo de empleos creados en la última década, cerca de 800.000 se han generado en sectores que no se caracterizan precisamente por sus altos salarios y sus buenas condiciones laborales. Se trata aquí de actividades como la construcción o la logística (que inevitablemente acompaña la confirmación de Madrid como uno de los grandes centros de consumo planetario) pero sobre todo de un conjunto de sectores subsidiario de la expansión de estas nuevas *corporations* globales. Un ejército, esta vez sí, de limpiadoras, guardias de seguridad, recepcionistas, empleados de hoteles, camareros, cocineras, azafatas de congresos, guías turísticos, sirvientas e internas y un larguísimo etcétera de profesiones de «futuro», que a diario mantienen perfectamente engrasada la maquinaria del Madrid global. Un nuevo proletariado de servicios que parece reproducir a escala mastodóntica la estructura de las economías domésticas de las ciudades aristocráticas de otros siglos: una clase encargada fundamentalmente de «servir» a los nuevos patricios.

Este crecimiento bicefálico del empleo es el rasgo más sobresaliente de la profunda dualización social de Madrid. Cada vez es más patente la frontera que separa a aquéllos que trabajan en el sector central de las corporaciones globales de quienes se ocupan del mantenimiento de estas firmas y de los servicios de reproducción de los verdaderamente beneficiados por la globalización. La disparidad en cuestión de renta y poder adquisitivo no puede ser más evidente. Madrid es la comunidad autónoma que presenta una mayor diferencia entre las rentas más altas y más bajas de su población asalariada: mientras que la nueva clase global puede medir sus ingresos en centenares de miles de euros anuales, más de un millón de trabajadores

de la región no alcanza los 15.000 euros brutos anuales. Más de un millón de personas con empleos precarios, que trabajan especialmente en la hostelería, los servicios personales, la limpieza y el empleo doméstico, o como peones en la construcción y la industria. Más de un millón de personas que se ven en apuros para acceder a derechos elementales como la vivienda en una ciudad en la que la hipoteca media cuesta anualmente la mitad de ese salario (7.100 euros), y que serán progresivamente marginadas de unos servicios públicos (equipamientos, sanidad, educación, servicios sociales) progresivamente privatizados y/o degradados.

Pero, y entre medias ¿qué queda? ¿Qué ha sido de la célebre clase media que supuestamente sería la gran beneficiada de la nueva riqueza madrileña y que repetidamente se nos dice es el objeto del mimo público y político? Sin duda en ésta deberíamos incluir un importante contingente de cuadros medios (vendedores, profesionales de carrera, mandos intermedios) que si por un lado, y siempre entre sueños truncados, se imponen como modelo de ascenso social la pertenencia a esa nueva *global class,* no es en realidad más que carne de cañón del estrés laboral y de una carrera constantemente amenazada por la precariedad. También a esta clase media pertenece el viejo funcionariado, aquél que se suponía se alimentaba del gigantismo administrativo de Madrid (si bien hace ya mucho tiempo dejó de ser tal), y que parece conservar lo que ya nadie tiene en estos «tiempos»: la seguridad de la renta a través del empleo de por vida. No obstante, todo parece apuntar a que aquí no estamos más que ante un resto arqueológico que por motivos de estabilidad política se mantiene como realidad para unos pocos. Los funcionarios instalados en la decadencia de unos números menguantes, recortados por las jubilaciones, la externalización de buena parte de los servicios públicos, sustituidos por contratados laborales precarizados, en claro retroceso salarial frente al segmento de los superasalariados, son más bien un trapo que neoliberales y políticos agitan de cuando en cuando, ya sea como refugio en la selva de la incertidumbre laboral, ya como diana de las iras sociales contra su supuesto privilegio y su proverbial ineficacia burocrática.

En resumen, ni cuadros medios ni funcionarios pueden constituir esa supuesta mayoría social que compondría el centro y la brújula metropolitana. En tanto segmentos amenazados, poco más podremos esperar de ellos que pequeñas escaramuzas de resistencia o, si se quiere, salidas corporativas en defensa de lo poco que les queda. Ésta y no otra es la auténtica clase media: un residuo políticamente impotente que apenas se mantiene a flote en un océano en transformación.

Hay, además, otro importante elemento de esta nueva estructura social de la «ciudad de las oportunidades» que no se puede dejar pasar por alto. Los efectivos que han nutrido las filas del proletariado de los servicios poco tienen que ver con la imagen tradicional del obrero industrial, heredero de una memoria de luchas, mayoritariamente varón y con los papeles en regla (con todos los derechos que ello implica). Hoy, en Madrid, de los cerca de tres millones de empleados de la región metropolitana, más de 500.000 son extranjeros y 1,3 millones son mujeres. Sobra decir que la fragilidad del empleo y la renta se transmite de forma vertical sobre estos sectores. Los dispositivos de explotación aprovechan la minorización de estos grupos relegando a mujeres e inmigrantes a los nichos de empleo peor remunerados y más precarizados. El resultado se puede resumir en una simple relación estadística: en Madrid un varón con nacionalidad española cobra de media el doble, exactamente el doble, que una mujer sin la «condición nacional».

Frente a este crecimiento constante de la brecha social entre favorecidos y desfavorecidos por la «globalización» se repite incesantemente que «primero se crea riqueza y luego se reparte», que finalmente la «ciudad abierta» y el libre mercado acabarán por derramar oportunidades para todos. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo esto? ¿Por arte de qué transfiguración veremos a las limpiadoras que sacan brillo a diario a las sedes empresariales convertirse en empleadas cualificadas, o siquiera en trabajadoras con sueldos y horarios que permitan vivir? La formación no parece ser la respuesta. Sabemos que la sobre-cualificación es moneda corriente en buena parte

de los trabajadores mal pagados. Sabemos incluso que la población inmigrante, que realiza buena parte de estos trabajos, tiene en muchas ocasiones un nivel de estudios superior al de sus coetáneos españoles.

No, Madrid seguirá creando empleos de mierda para al menos la mitad de su población. Visto así, la reducción del nivel educativo que muestran las recientes encuestas y el recorte de los presupuestos de educación que propugna Esperanza Aguirre son quizás medidas congruente. No hay ni habrá buenos trabajos para todos. Hay quienes tendrán que limpiar los retretes de las grandes empresas. Quienes tendrán que cuidar a los hijos de la nueva *global class* aún a costa de los suyos. Y quienes tendrán que hacer las camas de los ejecutivos «en tránsito» para mantener el liderazgo de Madrid como capital del «turismo de negocios». Y lo tendrán que hacer por salarios mensuales inferiores a 1.000 o incluso a 800 euros. Para garantizar este resultado «óptimo», ahí están las reformas del mercado de trabajo que en las últimas tres décadas se han traducido en recortes en la duración de los subsidios de desempleo, abaratamiento del despido y regulación de una amplia batería de contratos temporales y atípicos (por obra, en prácticas, etc.), para desembocar en la asimilación de la contratación indefinida a un empleo sin garantías. A los «nuevos madrileños» les corresponde la ley de extranjería, que asegura que cualquier despiste o indisciplina se traduzca en la retirada del permiso de residencia y trabajo.

La crisis abre, pues, otro interrogante: por bajos que hayan sido los salarios y deplorables las condiciones laborales, lo cierto es que hasta ahora la máquina de crecimiento metropolitana ha repartido con generosidad decenas, centenares de miles de puestos de trabajo. ¿Pero que pasará, como todo parece apuntar, cuando esto deje de suceder? Efectivamente, si la tendencia a la caída general de la tasa de empleo se mantiene (y desde el tercer trimestre de 2007 la tasa de empleo viene cayendo a buen ritmo), la famosa «máquina de crear crecimiento y empleo» se convertirá en otra ilusión más de la reciente década de prosperidad.

Desde luego, no cabe esperar que las transferencias del gasto social vayan a mitigar la pésima situación de los trabajadores: España sigue a la cola de la Unión Europea de los quince en gasto social, por más que su economía haya estado creciendo a un ritmo superior que la de estos países. Y qué decir del sistema fiscal (no olvidemos que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en proponer la eliminación del impuesto de patrimonio y de sucesiones), que no sólo no ha querido adaptarse a las innovaciones financieras y gravar los productos de ahorro de los más ricos, sino que tampoco ha hecho ningún esfuerzo por perseguir el fraude de altos vuelos, como denuncian una y otra vez las asociaciones de inspectores de hacienda. De hecho, se puede decir que la estructura de recaudación hace ya tiempo que perdió hasta el último atisbo de progresividad; descansa cada vez más en los impuestos indirectos (que gravan por igual a ricos y pobres) y en los salarios de los trabajadores de nivel medio, mientras se muestra absolutamente generosa con los beneficios empresariales, los dividendos de acciones, los fondos de inversión y demás prerrogativas de los más ricos.

Por lo que se puede ver, por tanto, la «solución política» a la crisis no va a pasar por ninguna forma de redistribución o reparto. Antes al contrario, los primeros pasos de la administración anuncian una nueva batería de medidas que refuerzan la precarización y feminización de los empleos peor remunerados. Además de lanzar un paquete de subvenciones directas a las empresas y de pedir para ellas todo tipo de reducciones de impuestos, cotizaciones a la seguridad social y costes del despido, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, a través de la Cámara de Comercio de Madrid, una serie de programas de «formación» y «ayuda» al empleo específicos para los sectores del comercio minorista y la hostelería; se trata sencillamente de refuerzos encubiertos a este proceso de reproducción de la precariedad y las desigualdades salariales. Así, al menos en el sector de los servicios no cualificados, antes que a una escasez global de empleo estamos asistiendo a un proceso de recorte de costes laborales mediante la contratación de trabajo femenino inmigrante. Un proceso que viene favorecido por la extrema precariedad

de las formas de contratación de los inmigrantes y las enormes diferencias salariales existentes entre españoles y extranjeros, por un lado, y hombres y mujeres, por otro.

No es de sorprender, por tanto, la excelente acogida que tuvo en el ejecutivo madrileño la propuesta de la patronal local (CEIM) de favorecer «un estudio en profundidad sobre la posibilidad de desarrollar agencias privadas de colocación» y mejorar la eficacia del Servicio Regional de Empleo. Estos dispositivos orientados a acabar con lo que en la jerga de los economistas liberales se llama «paro friccional», que se supone resulta del desconocimiento de las espléndidas oportunidades laborales que están a la vuelta de la esquina, serán los encargados de dinamizar una nueva ola de ataques al trabajo.

La creciente fractura social, en cualquier caso, no se limita simplemente al empleo. La dislocación social también se está dejando sentir en la geografía metropolitana, imprimiendo una poderosa huella en los procesos de localización de las «nuevas especies sociales» y, por supuesto, en las formas de relación social, en los hábitos de consumo y de uso del espacio público.

Financiarización y segregación urbana

De cómo se han dispuesto los medios para que una mayoría haya querido y podido convertirse en propietaria de viviendas y acciones, algunos —los más— compensando la escasez salarial y otros —los menos— multiplicando milagrosamente sus salarios millonarios. Y de cómo esta creciente diferenciación social se va reflejando en el paisaje físico urbano.

Otro importante factor ha contribuido a afianzar esta estructura social dualizada: se trata de la financiarización de las economías domésticas, es decir, del proceso por el cual una parte cada vez mayor de la renta de los hogares depende de sus activos y su patrimonio financiero —acciones, bonos, fondos de inversión y de pensiones, así como también propiedades inmobiliarias. Por ende, la consecuencia natural de la financiarización es que el salario ya no es la principal fuente de la renta de las personas, así como tampoco el principal factor determinante de su posición social.

La escalada de los precios de la vivienda en la última década (que aumentaron hasta tres veces en el caso de Madrid) y la fiebre de las finanzas populares han permitido a muchos particulares convertirse en pequeños inversores. Los beneficios sociales de la constitución de esta nueva «sociedad de propietarios» parecían infinitos: una sensación de riqueza casi generalizada, altos niveles de consumo, la producción mágica de un dinero que parecía multiplicarse casi por si solo bajo la forma de bienes inmobiliarios. La paradoja del experimento de este capitalismo popular es que se ha apoyado de forma casi exclusiva en aquellos bienes que resultan prácticamente imprescindibles para la reproducción de la vida. No resulta así nada sorprendente que el producto financiero más atrayente para los madrileños hayan sido los fondos de pensiones (¡justo cuando se amenaza con la crisis del sistema público!) y que la mayor parte de su riqueza provenga de la vivienda. Como de costumbre, en los momentos de plena efervescencia económica pocos ponían de relieve profundas debilidades del modelo como, por ejemplo, el que una parte de la población se haya visto cada vez más alejada de la posibilidad de acceder a una vivienda o que el endeudamiento de las familias se haya disparado a niveles alarmantes, que ponen en peligro la propia continuidad del ciclo.

No obstante, la conversión de la vivienda en un bien de inversión, más que de uso, ha tenido como resultado una nueva ampliación de la segregación espacial. Como es lógico, el peso creciente de la vivienda en el patrimonio de

las familias ha dirigido buena parte de las energías de los propietarios a «defender» el valor de sus bienes, lo que se consigue promoviendo la homogeneidad en el propio barrio y evitando la promiscuidad étnica, racial y de clase asociada precisamente a lo urbano. En este sentido, la financiarización ha tendido a fomentar no sólo la segregación, sino también un ideal de vida antiurbano. Las rentas medias y altas han proseguido su «vuelo» hacia al arco suburbano del norte y del oeste, instaurando como estándar de vida la vivienda unifamiliar de dos o tres alturas en urbanizaciones a menudo bunquerizadas, conectadas, y al mismo tiempo separadas, de los centros urbanos por vías motorizadas de gran capacidad.

Pero la penetración de la suburbanización en la geografía madrileña ha ido mucho más allá de las familias con posibles; ha alcanzado también a los hogares de rentas medias y medias-bajas, que aspiran a la «tranquilidad» del chalé y del jardín privado. Así, también en el sur y en el este del área metropolitana se han producido nuevos ensanches «privados», destinados a quienes han podido escapar de los barrios del viejo cinturón obrero e industrial de la región. Una huida que paradójicamente ha sido financiada por los recién llegados, los inmigrantes, que con la compra o el alquiler de las viejas viviendas obreras han permitido a sus antiguos dueños costearse sus sueños de felicidad privada.

El reciente *boom* inmobiliario ha contribuido, de igual manera, a ampliar la diferencia de renta entre el norte y el sur de la región metropolitana. Los grandes municipios del sur (Parla, Fuenlabrada, Getafe o Móstoles) son ahora comparativamente mucho más pobres que las grandes aglomeraciones suburbanas del arco norte y oeste (Pozuelo, Majadahonda o Torrelodones). Esta segregación se ha visto además reforzada por la localización de servicios sociales privados (clínicas, universidades…), complejos de ocio exclusivos (como los clubs de golf) y centros financieros y corporativos (véanse las ciudades-empresa del Santander y Telefónica, o el complejo de las Cuatro Torres) en el norte y oeste de la región. Mientras, los polígonos industriales, los centros logísticos y todas las instalaciones de

desecho (incineradoras, depuradoras, escombreras...) se han situado invariablemente en el sur y el este de la metrópolis.

Naturalmente, este mapa de ricos y pobres dibuja también las áreas de mayor tensión en el futuro próximo. Ahora que la máquina de empleo y el ciclo inmobiliario comienzan a flaquear, el viejo cinturón industrial, base de los movimientos vecinales de los años setenta y área de castigo de la gran crisis de los ochenta, vuelve a ser la zona potencialmente más sensible a la crisis social. Con una población nativa envejecida, y que en muchos casos se siente atrapada, y una población joven autóctona y de origen inmigrante con empleos precarios y sin expectativas ni vías de ascenso social, estas zonas están desarrollándose como la «nueva periferia social metropolitana», escenario más que probable de los nuevos conflictos sociales por venir.

Por otro lado, en la medida en que la prosperidad madrileña ha dependido del consumo financiado por el endeudamiento de las familias y el valor de sus patrimonios inmobiliarios, el hecho de que la crisis se esté manifestando en primer lugar en la caída de los precios de la vivienda y en la destrucción de empleo está haciendo que una cantidad considerable de hogares no pueda hacer frente a sus deudas y entre literalmente en bancarrota. El espejismo del efecto riqueza impulsado por las revalorizaciones del *boom* inmobiliario puede así tornarse en un «efecto pobreza» de consecuencias urbanas inciertas. Desde luego, sin políticas sociales que compensen esta tendencia, la crisis revertirá en una ciudad más cruel y más segregada, en la que la pobreza será criminalizada y convertida en chivo expiatorio de las desgracias privadas.

En este paisaje social revolucionado, en el que se acusan las tendencias a la polarización y la segregación y en el que la propiedad se ha convertido en criterio de distinción y de posición social, las formas de gobierno no parecen haberse quedado atrás. Si Madrid se ha transformado de forma radical, su clase política ha sabido estar a la altura, ensayando formas de gobierno y medios de gestión adecuados a las circunstancias: esto es, capaces de ser

tanto funcionales a los nuevos grupos socioeconómicos dominantes, como de imponer una nueva hegemonía que, de momento al menos, se ha traducido en un amplio consenso social.


¿VIENE USTED A VER A LA PRESIDENTA REGIONAL?
SÍ, PARA TOMAR APUNTES...
COMUNIDAD DE MADRID

II. La nueva *intelligentsia* política.
Madrid como laboratorio de la gobernanza metropolitana

Donde se nos presenta a Gallardón (ese líder moderno, incluyente y dinámico que ha logrado desarticular las resistencias que de otro modo habrían generado los favores que presta a las élites) y a la gran Esperanza Aguirre y Gil de Biedma (que con modos y maneras más agresivos ha sido igualmente complaciente con los de arriba, armando todo un aparato ideológico a su medida).

Reformas radicales, administraciones decididamente agresivas y una vinculación precisa de los ordenes de gobierno a los intereses de la nueva oligarquía. Este conjunto de fenómenos difícilmente se podría entender y calibrar sin atender a las transformaciones de la clase política madrileña. Desde que en 1995 Alberto Ruiz-Gallardón rompiese el monopolio político de los socialistas en la Comunidad de Madrid y refundase en 2003 la derecha caciquil de Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento, la derecha madrileña ha sufrido muchos cambios, al mismo tiempo que lograba una incuestionable hegemonía política.

Y si aquí se habla de la «derecha» como el centro de la clase política madrileña, no es simplemente por su capacidad para mantener a la vez la alcaldía de la capital y el gobierno de la comunidad, sino porque la miseria de la oposición institucional ha hecho que el espectro político de Madrid se haya estrechado considerablemente.

Una situación que ha sido provocada por el monumental despiste de los socialistas madrileños, carentes de discursos políticos alternativos una vez ocupado su nicho ideológico por Gallardón, y todavía hundidos por el Tamayazo, la corrupción, las luchas internas y el fiasco de la candidatura de Miguel Sebastián. De este modo, el PSOE madrileño, subordinado en la práctica a los mismos intereses que las administraciones del PP, ha contemplado impasible la construcción de una fuerza política hegemónica frente a la que no ha sido capaz de proponer nada que tuviera el más mínimo sentido para las mayorías despojadas o perjudicadas por el nuevo modelo social. Ni que decir tiene que Izquierda Unida apenas ha sabido hacer nada mejor.

Pero, ¿qué rasgos han hecho posible esta situación? En primer lugar, se debería reconocer la importancia de la figura del nuevo alcalde. Con la llegada al gobierno del muncipio de Madrid, tras su paso por la presidencia de la Comunidad, Gallardón (rebautizado el alcalde-faraón) y su séquito de asesores de imagen impulsaron una operación de imagen política sólo equiparable a la que acompañó, veinte años antes, a Tierno Galván. Todas las iniciativas políticas han ido así acompañadas de grandes campañas de marketing, al tiempo que el propio alcalde se proponía como una paradójica figura «carismática» capaz de mediar entre los distintos intereses colectivos que concurren en la ciudad. Con un discurso público, aparentemente «ciudadanista» y abierto, el nuevo gobierno municipal ha tratado así de establecer alianzas incluso con sectores de la sociedad civil tradicionalmente adscritos a las viejas formaciones de izquierdas, como eran algunas ONGs o la Federación de Asociaciones de Vecinos. Los planes especiales para los distritos más desfavorecidos, los proyectos de remodelación de la almendra central, la reconstrucción de un tejido cultural y de espectáculos en el centro de la capital o las candidaturas olímpicas de 2012 y 2016 han sido plenamente congruentes con esta idea de ciudad moderna, creativa, abierta.

Frente a esta imagen, los movimientos de protesta, salvo en algunas cuestiones relativa a la remodelación de la M-30, la deuda contraída por el Ayuntamiento o las protestas contra los parquímetros, no han ido, de momento, más allá de

ámbitos concretos bien localizados. De hecho, cabe decir que éste ha sido el mayor logro de un alcalde que ha puesto el municipio a los pies del sector de la construcción y del empresariado multinacional, sin despertar por ello una oposición suficiente. La imagen amable de esta administración ha servido, de este modo, de dulce cobertura para la nueva ciudad global convertida en máquina de crecimiento al servicio de los intereses de la oligarquía inmobiliaria y financiera.

De todas formas, Gallardón parece haber sido la puerta de entrada a esta revolución de las élites capaz de construir nuevas hegemonías. El primer experimento sí, pero quizás sólo eso. Las innovaciones más radicales, responden a la iniciativa de la «lideresa», Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad desde 2003.

Cuando Aguirre accedió en 2003 a la candidatura de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular muy poca gente podía imaginar la fulgurante carrera que tenía por delante. Famosa hasta la fecha por sus espantosos ridículos ante las cámaras (como la célebre referencia al Premio Nobel «Sara Mago»), Aguirre no ha parado de escalar posiciones frente a Gallardón, a quien derrotó en su pugna por controlar los mandos del Partido Popular madrileño en 2004 y en su disputa en la renovación del Partido a nivel nacional en 2008.

Lo que podríamos llamar, en cualquier caso, «gobernanza esperanzista» no ha consistido sólo en ofrecer una imagen agradable y en concertar reuniones con todos los agentes reconocibles de la ciudad, según la «dulce» forma del estilo Gallardón. Mucho más agresiva y radical, la novedad del nuevo experimento aguirrista consiste en intentar producir directamente «sociedad civil» un cuerpo social movilizado capaz de responder como un solo agente a las nuevas reformas económicas y sociales. Para ello ha sido preciso componer una vasta operación de ingeniería social que, aunque un tanto caótica e improvisada, se ha mostrado completamente funcional al modelo neoliberal y pro-oligárquico del gran laboratorio madrileño. Sus principales piezas habrían sido las siguientes:

La renovación ideológica y la construcción de una política mediática combativa

En un primer plano se sitúa la profunda renovación de los media y los *think tanks* conservadores. Por un lado, la FAES (Fundación para el Estudio y Análisis Sociales), el órgano que se diseñó para el retiro de Aznar después de su último mandato y que, tras la inesperada derrota en las elecciones de 2004, adquirió un papel protagónico en la formulación de propuestas políticas y en la demarcación de la nueva ideología de carácter liberal-conservador. Pero también y de forma aún más destacada, *Libertad Digital*, creada en el año 2000 con Federico Jimenez Losantos a la cabeza. El objetivo: generar un discurso para la derecha y desde la derecha que ganase en frescura y populismo, apoyado en un nuevo estilo mediático más cercano al agit-prop de la vieja extrema-izquierda (de la que por cierto provienen la mayoría de sus principales colaboradores) que al tradicional discurso conservador. De este modo, *Libertad Digital* ha suprimido muchos de los complejos morales que ciertos sectores liberales tenían con respecto a temas como la guerra de Irak, el mundo árabe o la inmigración. Para ello ha confeccionado sofisticadísimas campañas de contaminación y saturación mediática como la que promovió la sospecha acerca de la versión oficial del 11-M y su relación con ETA.

En definitiva, con mezclas de tendencias neocon y *libertarians* al estilo de Estados Unidos, *Libertad Digital* ha allanado el camino para la nueva revolución ideológica, que en palabras de su presidente Alberto Recarte, se podría resumir así: «El poder sea de derechas, centro o izquierda corrompe y por eso hay que desconfiar de él». Sobre estos principios, la nueva administración no ha tenido sin embargo remilgos para convertir al ente público, Telemadrid, en una prolongación de este nuevo clúster mediático, al tiempo que ha lanzado un segundo canal autonómico, La Otra, y ha dado licencia a nueva colección de canales de televisión digital de marcado carácter neoliberal o neoconservador.

La promoción de movimientos sociales agresivamente conservadores

Es en este ámbito, quizás, donde la apuesta ha sido más arriesgada y en donde los resultados pueden ser más amplios y duraderos en las próximas décadas. A partir de los experimentos —todavía anclados a los imaginarios tradicionales de la derecha hispana— protagonizados en 2004 y 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Foro por la Familia, y a partir también de ciertos indicios de que existía un campo prometedor para la innovación en los discursos y en los medios de movilización social (véase el movimiento Peones Negros, que puso en jaque la versión oficial del 11-M), la nueva élite política y mediática se ha apropiado, siempre de forma invertida, de las temáticas clásicas de los movimientos sociales: multiculturalismo, ecología, solidaridad internacional, intervención social. Baste señalar, en este sentido, la reciente campaña contra el Mayo del ‘68, o la oleada de ataques contra todos los iconos «progres», al más puro estilo Sarkozy. O estas declaraciones del joven esperanzista Pablo Casado, líder de las juventudes del PP: «Los jóvenes idolatramos a mártires como Miguel Ángel Blanco, no a asesinos como el Che».

El anhelo de una regeneración ideológica, de un nuevo idealismo de derechas, se ha manifestado también en el ataque, con graves consecuencias sociales, al Estado del Bienestar, acusado de promover una población vaga y dependiente de las ayudas estatales. Esta producción de movimientos sociales es, por tanto, sólo una parte, importante por supuesto, del gran experimento de producción de una sociedad civil desde arriba.

Hacia la creación de una sociedad civil desde arriba

En esta estrategia ha sido necesario, la articulación de una pieza institucional clave: el control de las políticas públicas en materia social. Una estrategia que Esperanza Aguirre ha impuesto más allá de la Comunidad, alcanzando, a golpe de cañonazo, al municipio de Madrid, tal y como se puede comprobar con el nombramiento de responsables de su confianza, como por ejemplo Concepción Dancausa, concejala de Asuntos Sociales e Inmigración en el Ayuntamiento de Madrid y «cerebro» del nuevo modelo social madrileño.

El control de los presupuestos y del gobierno permite, en efecto, poner en práctica una flamante colección de dispositivos capaces de ensayar modelos sociales de gestión alternativos, a partir del apoyo, subvención y promoción de un nuevo tejido de ONGs, asociaciones, fundaciones y universidades privadas vinculadas al ideario conservador.

Por ejemplo, en materia de inmigración, y como veremos luego con más detalle, las medidas han ido dirigidas en un doble sentido. En primer lugar, se ha tratado de eliminar la mayoría de los instrumentos públicos de asistencia y acogida de inmigrantes, cerrando gran parte de los Centros de Atención Sociolaboral a Inmigrantes (CASI) y cancelando otros muchos dispositivos recogidos en los planes de inmigración municipales (Plan Madrid Convive de 2004) y regionales (Plan de Integración 2006). Al mismo tiempo se han creado los Centros de Integración y Participación (CEPI), con una atención dirigida por nacionalidades y más enfocados a cuestiones cultural-folklóricas que a prestar una ayuda real en materias cruciales como la vivienda o el trabajo. Esta forma de gestión ha reforzado las fronteras que determinan la inclusión o exclusión de los migrantes, así como la consideración de los sin papeles como un desecho no reconocido, susceptible de una rápida expulsión.

En un segundo momento, esta política se ha propuesto la transformación del sector de la intervención social, externalizado desde hace años, en un auténtico tejido social al servicio de las estructuras políticas. El resultado ha sido la creación de una red asociativa y social integrada por entidades como la Universidad Católica Francisco de Vitoria, (cuya Fundación Altius gestiona muchos de estos CEPIs) y una multitud de asociaciones que funcionan como campo de experimentación de las nuevas políticas sociales. Se trata de una innovadora modalidad de gobierno que no pasa por crear dispositivos abiertamente racistas, sino mecanismos multiculturales capaces de generar una perfecta segmentación de la sociedad con el objetivo de diferenciar, separar y comprender los procesos sociales desde una óptica de gestión y control de las poblaciones «de riesgo», al tiempo que ofrecen herramientas de movilización productiva adecuadas para una metrópolis cada vez más mestiza.

En conjunto, y aunque sólo se pueden mencionar de forma somera, la revolución de las prácticas y discursos de mando que caracterizan el experimento del modelo Madrid parece tener como propósito no sólo lograr un gobierno «cómodo y flexible», adaptado a las nuevas funciones de la posición global de la ciudad, sino también producir una sociedad plenamente adaptada a eso que los neoliberales llaman «mercado». Es decir, una realidad social convertida en campo abonado para los dispositivos de explotación del nuevo bloque oligárquico.

Donde se da cuenta del saqueo de los servicios públicos madrileños —a través de la privatización descarada o encu-



El Metro que todos quisieran tener, vive en Madrid. Metro

III. Servicios ¿públicos?, más bien nichos de mercado

bierta y del deterioro del servicio—, para engrosar el ya pingüe botín de la oligarquía empresarial.

Territorio privilegiado de este revolución desde arriba, literalmente de este experimento de construcción de una sociedad nueva, perfectamente adecuada a las necesidades de la nueva oligarquía corporativa, lo han constituido sin duda los servicios públicos. A medida, efectivamente, que la máquina de explotación madrileña ha ido agotando los caladeros del crédito, el capital transnacional y el negocio inmobiliario, se han abierto nuevos nichos de mercado que, invariablemente, han redundado en un expolio de los recursos comunes. De otro lado, la transferencia de competencias a las comunidades autónomas ha puesto en manos de la administración madrileña buena parte de los activos y servicios que otrora componían las principales partidas del Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Enormes partidas presupuestarias que pueden servir tanto para beneficiar a determinados agentes como para reforzar las nuevas divisiones que están abriendo en canal a la sociedad madrileña.

El negocio de la salud

Empezando por la ya afamada operación de acoso y derribo a la sufrida sanidad pública madrileña, que resiste a duras penas los embates...

El principal capítulo de este experimento, el de mayor relevancia mediática, y en el que se han producido las primeras batallas, ha sido la sanidad pública, que experimenta una época de radical transformación desde que Esperanza Aguirre tomara posesión de su cargo en 2003. La primera legislatura se inició con la promesa de construir ocho nuevos hospitales, una medida razonable en vista de la saturación de los viejos hospitales de la capital y del sur de la Comunidad. Los nuevos centros iban destinados a la segunda o tercera corona metropolitana, en zonas de deficientes dotaciones sanitarias y con demandas antiguas en este sentido.

Tras esta propuesta, se ocultaba no obstante una suculenta operación política y mediática. La mayoría de los hospitales se inauguraron poco antes de las elecciones autonómicas de 2007. Las proclamas que hablaban de uno de los «mejores modelos sanitarios del mundo», en el que los hospitales públicos ya nada tendrían que envidiar a las mejores clínicas privadas, ocultaban, sin embargo, el primer episodio de privatización de la sanidad pública.

Un episodio particularmente escabroso, que había tenido su prolegómeno unos años antes con la operación de descrédito de la sanidad pública en el conocido «Caso Leganés». La espectacular acusación a un jefe de servicio, el doctor Montes, de autorizar 300 sedaciones irregulares con resultado de muerte. Con esta campaña de derribo, además de dañar la imagen de la sanidad pública apuntando a un hospital de referencia (pocos meses después de iniciado el expediente el número de leganenses con seguro privado se había duplicado), la acusación cumplió el objetivo de «advertir» al estamento profesional de «con quién debían de habérselas de aquí en adelante»,

tomando como cabeza de turco a un grupo de profesionales prestigiosos y claramente contrarios a la administración. De poco sirvió que tres años después la justicia diera la razón a los acusados.

En cualquier caso, los nuevos hospitales se realizaron mediante un sistema de gestión público-privada emulado del Reino Unido y conocido por sus siglas en inglés: PFI (Private Financial Iniciative). El propósito era dar entrada a la financiación privada tanto para la construcción del hospital como para su gestión y mantenimiento. Este modelo lo habían hecho posible dos reformas legislativas aprobadas en el primer año de legislatura de José María Aznar con el voto favorable del PSOE (el Real Decreto Ley 10/1996 y la Ley 15/1997) y que concedían nuevos privilegios al sector privado en la gestión sanitaria, siempre en aras de una supuesta flexibilización y autonomía de funcionamiento de la sanidad. A través de la incorporación de inversión privada y de modelos de gestión abiertamente empresariales, se pretendía adecuar el sector a la realidad económica imperante y reducir su impacto en las arcas públicas. Ya antes se habían dado pasos importantes con la externalización de servicios básicos no sanitarios (limpieza, comida, transporte de ambulancias, seguridad, etc.).

El modo de funcionamiento y gestión de los hospitales PFI consiste en ceder a una o varias empresas la construcción, mantenimiento y contratación o subcontratación de determinados servicios sean sanitarios (como puedan ser los laboratorios) o no (como la gestión administrativa, que incluye el manejo de las historias clínicas de los pacientes). Sin embargo, el modelo de gestión PFI puede ser la antesala de un sistema completamente privado (desde la titularidad hasta la contratación de personal sanitario), que ya se está experimentando en el nuevo hospital de Valdemoro, y que se quiere implantar en otros cuatro nuevos hospitales (Carabanchel, Villalba, Móstoles y Torrejón) así como en buena parte de la Atención Primaria (réplica del modelo Fundación Jiménez Díaz/ CapioSanidad).

Desde luego, la conclusión obvia de la aplicación de las

nuevas fórmulas de gestión es que las decisiones serán tomadas con criterios empresariales antes que sociales. Aunque el gerente del hospital sea nombrado por la Consejería de Sanidad, es sin embargo la empresa concesionaria o propietaria la que toma *de facto* las decisiones de gestión. Se supone que la calidad del servicio está garantizada por agencias de evaluación independientes y por una especie de «voto popular» donde, a través de la encuesta de satisfacción realizada a los usuarios por la propia Consejería, se construye un ranking de hospitales destinado a estimular la «necesaria» competitividad interhospitalaria. Los hospitales con mejor posición en el ranking y que atraigan más pacientes recibirán más recursos e incentivos. Estamos aquí frente a la aventurada aplicación del principio de que «el dinero sigue al paciente», que pronto se aplicará también a los centros de atención primaria una vez se establezca el área única.

La perseguida «claridad» a la hora de destinar recursos tiene, no obstante, muchos puntos oscuros: las ratios de personal por paciente son mucho menores que en los antiguos hospitales públicos; el personal sanitario está siendo «recolocado» de los viejos a los nuevos hospitales, sin que por ello se amplíe su número; los nuevos hospitales no tienen el tamaño crítico (la mayoría son demasiado pequeños) para albergar la mayor parte de las especialidades; las externalizaciones de servicios como la limpieza repercuten en una mayor incidencia de epidemias en los centros sanitarios, etc. Tampoco suele decirse que en los países pioneros de la «fórmula PFI», como Canadá o Reino Unido, este tipo de partenariado ha sido fuertemente cuestionado por usuarios y médicos, hasta el punto de que algunos centros han sido «recuperados» por el sector público y organizados según los antiguos modelos de gestión.

Más allá, sin embargo, de que la calidad del servicio de salud a los ciudadanos madrileños pueda ser un asunto relativamente banal para la administración, el punto más fuerte de la gestión concertada de la sanidad, el supuesto ahorro presupuestario, puede ser también completamente falso. La comunidad autónoma, a cambio de la delegación en las empresas concesionarias, tiene que

hacerse cargo de la financiación general del hospital, que garantiza mediante el pago de un canon anual. Un canon que incluye los gastos de gestión así como el normal «beneficio» para las empresas y una parte destinada a sufragar el coste de la construcción de la infraestructura, siempre con unos intereses altísimos, durante un periodo de 30 años. El resultado de todo esto, tal y como demuestran los estudios realizados (consúltese la web de la Coordinadora Anti Privatización http://www.casmadrid.org/) es que los nuevos hospitales PFI salen más caros por paciente que los viejos hospitales de la red pública. La diferencia estriba en que lo que antes aparecía en la partida de gastos sanitarios pasa a contabilizarse como pasivo y pago de intereses.

Pero ¿tanto embrollo para un asunto puramente contable? ¿Cuáles son las razones para animar semejante reforma? El motivo es el mismo que en el caso de la obra pública en general —y en el de la reforma de la M-30 en particular—: la transferencia de dinero público al sector privado. Y también los beneficiarios son prácticamente los mismos: así, FCC y Caja Madrid se han hecho cargo del hospital de Arganda, Sacyr Vallehermoso de los de Coslada y Parla, Dragados del de Majadahonda, Acciona del de San Sebastián de los Reyes, Apax Partners del de Valdemoro, Hispánica del de Aranjuez y Begar del de Vallecas. Y no sólo del hospital, sino también de algunos servicios tan rentables como la cafetería o el parking.

De otra parte, si bien los hospitales son la parte del león de este programa de «fomento del negocio sanitario», otros experimentos se vienen sumando en áreas tan sensibles como los centros de especialidades, la atención primaria o la propia carrera médica. Así, por ejemplo, dos centros de especialidades (Pontones y Quintana) han sido ya vendidos a una entidad privada: la poderosa multinacional sueca Capio (empresa transnacional de servicios sanitarios participada principalmente por fondos de inversión), que ya posee en Madrid los hospitales Infanta Elena de Valdemoro y la Fundación Jiménez Díaz, además de otros dos hospitales privados. La privatización de estos dos Centros de Especialidades Periféricas (CEP), situados

en el área sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, es simplemente parte de un contrato de colaboración por el que se deriva a esta entidad la asistencia hospitalaria urgente y programada de atención especializada, así como los diagnósticos de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica y endoscopias de la población de 14 Zonas Básicas de Salud (400.000 personas).

Por su lado, la atención primaria, mermada en recursos y con una grave carestía de medios y personal, también está siendo objeto de una profunda remodelación. Con argumentos de tinte populista (situar a las personas en el centro de decisión del sistema sanitario, estableciendo su derecho a elegir sobre dónde y por quién quieren ser tratadas) se pretende eliminar el actual sistema de zonificación sanitaria en 11 áreas (donde cada una tiene asociados un Hospital, un CEP y varios centros de atención primaria) y pasar a un sistema área única, con un coste económico asociado de adaptación de los sistemas de información de 10,3 millones de euros (y esto es sólo el principio) y un coste social que se estima altísimo. Por un lado se separará a un buen número de pacientes de su zona de referencia, donde se tendrán que hacer la mayoría de las pruebas médicas, lo que evidentemente cortocircuitará toda comunicación entre el médico (de otra zona) y los centros de diagnóstico. Por otro, se introducen los mismos criterios de competitividad interhospitalaria en los centros de atención primaria: creación y uso de rankings e indicadores de atención para fijar los recursos necesarios de cada centro

Por último, la formación sanitaria tampoco podía escapar a la supuesta fiebre del ahorro y la eficacia privada. Por orden administrativa, cuatro hospitales han estado a punto de albergar facultades universitarias, tres de las cuales estarían asociadas a universidades privadas como la Alfonso X El Sabio, la Francisco de Vitoria y la Universidad Europea de Madrid. En estas nuevas facultades se debía formar un cuerpo médico y sanitario con un código moral bien alejado de las posturas comunes en la práctica médica laica y moderna en materias como el aborto, los cuidados paliativos o la investigación con célu-

las madre. De momento, el rechazo del Ministerio de Educación ha impedido que esta iniciativa saliera adelante, pero tiempo al tiempo…

En conjunto, el nuevo modelo sanitario parece apuntar a un servicio público cada vez más degradado. La supuesta eficacia del sector privado en la provisión de un servicio como la salud parece limitarse al ahorro de costes, un ahorro que, como hemos visto, revierte en el beneficio de las empresas, no en los presupuestos públicos. Al mismo tiempo lo que hasta ahora había sido la garantía de la calidad del servicio, la autonomía y vocación del personal sanitario, se ve día a día erosionada por las reformas de la administración Aguirre. El resultado previsible: la conversión del sistema sanitario madrileño, que hasta hace poco era un servicio público con unos altos niveles de calidad (considerado de hecho uno de los mejores del mundo), en un servicio residual e infradotado destinado a aquellas personas y familias que no puedan asumir el coste de la atención privada.

Como no podía ser menos, serán sin duda aquéllos sin alternativas sanitarias (que la Comunidad ya reconoce con la aplicación de distintas tarjetas sanitarias) los que más sufran las consecuencias del experimento neoliberal. Pero todos, incluso aquéllos con seguros privados, padecerán el deterioro de un sistema sanitario público, que cuando se presentan enfermedades graves ha sido y todavía es la mejor solución médica.

Al borde de la crisis de la educación

…continuando con el sistema educativo madrileño, igualmente maltratado en tanto que servicio público, aunque modélico cuando se considera su tradicional papel de reproducir y ahondar esas desigualdades que, de siempre, han cimentado un cuerpo social bien jerarquizado…

Si en la sanidad la diferenciación del servicio en razón de la renta o la clase de los pacientes está siendo uno de los resultados de la política de privatizaciones, en materia de educación se podría decir que éste es directamente el objetivo. No a otro fin responde la existencia, desde hace ya décadas, de numerosas congregaciones, fundaciones y empresas que gestionan colegios de educación primaria y secundaria. La justificación de esta situación, que fue ratificada en la Transición al tiempo que se aseguraba la financiación pública de estos centros a través de la figura del «concierto escolar», apela al reconocimiento de la libre elección de la educación de los hijos. Así, los colegios concertados y privados llevan décadas provocando *de facto* una formación diferenciada según un criterio de clase y/o renta que, si bien generalmente no se traduce en un «mejor» nivel académico (por más que se oculte sistemáticamente, el mejor rendimiento académico corresponde a la enseñanza pública, tal y como muestran las pruebas realizadas en Primaria y Secundaria, además de los resultados de Selectividad), sí impide el encuentro durante la infancia y adolescencia de grupos sociales distintos. Esto sencillamente favorece la reproducción de las diferencias de capital social y simbólico. Por lo demás, si el objetivo declarado y el principio legitimador de la educación pública ha sido propiciar la igualdad de oportunidades, parece lógico sospechar que la externalización de servicios educativos alterará este fundamento al introducir lógicas de gestión que pasan por la maximización del beneficio económico y la atención diferenciada del alumnado.

Las transferencias en materia de educación a las comunidades han supuesto una nueva oportunidad para reforzar la segregación en la escuela. El gobierno del PP no se ha caracterizado por su discreción a la hora de apoyar la enseñanza concertada, tal y como señalan medidas recurrentes como la cesión de suelo para centros de titularidad privada, los importantes beneficios fiscales de los que gozan, la omisión de construcción de escuelas públicas en nuevos barrios, etc. De este modo, la enseñanza pública ha ido perdiendo terreno frente a la concertada y privada, hasta el punto de que Madrid es una de las pocas comunidades autónomas en las que la mayor parte del

alumnado acude a escuelas de gestión privada. De hecho, en el curso 2006-07 sólo el 37 % de los alumnos escolarizados en Enseñanzas de Régimen General asistió a un centro público en el municipio de Madrid. La distribución geográfica de este porcentaje manifiesta la clara especialización social de la enseñanza pública en los segmentos sociales más desfavorecidos. Baste comparar que en el distrito de Salamanca (el tradicional barrio burgués de la ciudad), sólo el 15 % de los alumnos asistían a un centro público, mientras que en Villaverde (núcleo del sur industrial) este porcentaje se elevaba al 61 %.

La inmigración ha venido a reforzar además esta frontera de clase en materia educativa con otra de carácter étnico, que se manifiesta de forma meridiana en el hecho de que en ningún distrito existe una correspondencia entre las ratios concertado-privado-público de los alumnos nativos y aquéllos que provienen del extranjero. Así, si solamente el 33 % de alumnos nativos acuden a colegios públicos madrileños, el porcentaje de los alumnos de procedencia extranjera es casi el doble. Si se consideran los casos por distrito, teniendo especialmente en cuenta aquéllos en los que la población inmigrante no es de origen europeo, el porcentaje suele superar el 70 %. De este modo se declina la famosa «libertad de educación» esgrimida repetidas veces frente a cualquier denuncia contra los privilegios de la enseñanza concertada y privada: los padres prefieren el colegio concertado, aunque sea peor, que «mezclar» a sus hijos con pobres e inmigrantes.

De otra parte, a esta segregación se ha añadido recientemente un conjunto de nuevos dispositivos que promueven una fuerte diferenciación interna dentro de los propios centros públicos. Se trata de la diversificación curricular, las diferentes compensatorias (interna, externa, aulas de compensatoria externa, etc., que separan a los alumnos según su rendimiento y actitud) y las aulas de enlace (para una supuesta inmersión lingüística rápida) recogidas como Medidas de Atención a la Diversidad, y que se supone deberían facilitar la integración y «poner al nivel» a alumnos que por distintos motivos no pueden seguir las clases de su curso de referencia. Obviamente, lo que se

observa es que una parte importante de la población inmigrante en edad escolar, así como de los chicos y chicas de los grupos sociales «menos favorecidos» y de todos aquéllos que no se comportan en clase como se espera, han acabado siendo derivados a estos servicios, convertidos ahora en una suerte de cuneta o escombrera del sistema escolar. Valga como botón de muestra que si bien en el curso 2006-07 los extranjeros sólo suponían el 12,2 % de todos los alumnos de Enseñanza General en la Comunidad, representaban el 52,8 % de los alumnos que asistían a las aulas de compensatoria.

A pesar de las buenas intenciones declaradas y de los recursos invertidos, estas medidas de atención a la diversidad parecen haber sido muy poco eficaces en términos de inclusión escolar. Pocos son los alumnos que se reincorporan a la vida escolar «normal», pocos los que reducen su absentismo, y pocos también los que sacan provecho de estos dispositivos para su inserción laboral. De hecho, en muchos casos esta diversificación conlleva la interiorización de una posición de inferioridad. La probada falta de eficacia de estas medidas induce la sospecha de si no serán otros sus objetivos reales. Por otra parte, no sólo son los grupos minoritarios —migrantes extranjeros y alumnos de bajo nivel socioeconómico— los derivados a estos servicios, sino que muchas veces las propias diferencias que, en teoría, valorizan estos dispositivos, son utilizadas como coartada para explicar el fracaso escolar, desestimando los factores socioeconómicos. En definitiva, la operación última de este modelo educativo parece ser la de convertir la segregación de etnia y clase social en un problema de nivel académico o de disciplina, soslayando las causas reales de los problemas que amenazan a una institución al borde del colapso.

Como era de esperar por todo lo dicho, la Comunidad de Madrid no sólo no ha intentado solucionar estos problemas, sino que ha creado una lista paralela de interinos para estas medidas, de lo que resulta una gran rotación laboral de profesionales y una gran falta de coordinación con los profesores «regulares». De hecho, algunos de los dispositivos de diferenciación educativa, como la Compensatoria

Externa, se están subcontratando a empresas privadas, derivando así el problema al sector privado al tiempo que se genera un nuevo «nicho de negocio».

La gestión de la heterogeneidad en la escuela a través de la diferenciación por nivel apunta hacia un tipo de políticas públicas que ya no se dirigen, ni siquiera de manera formal, a un futuro inclusivo y equitativo. En conjunto, la reducción relativa del peso de los centros públicos, el trato de favor a los centros concertados y privados y la externalización progresiva de servicios produce un vaciamiento de este pilar social que es la educación pública.

La «gestión» del extranjero

...para finalizar con las audaces innovaciones que se han puesto en marcha para tratar con los infieles que llegan a nuestro territorio y con otras gentes del este y de allende los mares, y que han logrado mantenerlos aparte y garantizar unas condiciones óptimas para su rentable explotación.

Con 800.000 extranjeros empadronados, la Comunidad de Madrid es uno de los primeros centros receptores de flujos migratorios transnacionales. Como hemos visto, la enorme eficacia de la máquina de empleo madrileño ha creado en estos años algunas oportunidades para gran cantidad de migrantes procedentes en su mayoría del Sur del planeta. Y esto a pesar de unas leyes de extranjería que condicionan el acceso a cualquier derecho a la obtención de permisos de residencia y trabajo muy difíciles de obtener.

Conscientes de que la riqueza de la ciudad ha dependido en gran medida del trabajo barato proporcionado por estos nuevos residentes y de que el «futuro social» de la ciudad pasará en buena medida por ellos, Ayuntamiento y Comunidad presentaron en 2004 y 2006, respectivamente,

sendos Planes de actuación para hacer frente al creciente aumento de la población extranjera. Concebidos todavía desde una perspectiva de «integración social», el Plan de Integración 2006-08 de la Comunidad (conocido como Plan Madrid) trataba de promover la implicación de la población autóctona y de la población migrante en el proceso de integración. Sobre el papel, el Plan buscaba reforzar a través de programas, actividades, cursos, campañas y estudios los recursos ya existentes en áreas tan diversas como empleo, vivienda, educación, servicios sociales, salud, opinión pública o participación. A su vez, se preveía la consolidación de los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI), cuyas funciones vendrían a complementarse con la creación de los Centros de Participación e Integración (CEPI), concebidos como lugares de encuentro entre autóctonos y migrantes, aunque separados por nacionalidades de origen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, presentó su I Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural, un plan innovador y ambicioso que afirmaba querer ir más allá de la mera integración de la población migrante y «perseguir el impulso y la mejora de la convivencia entre todos los madrileños». La actuación del Ayuntamiento quedaba definida en torno a tres ejes (articulación del modelo convivencial, normalización en el acceso a los recursos, e impulso y mejora de la convivencia) entre los que se distribuirían 37 dispositivos de nueva creación, aunque finalmente sólo 34 llegarían a materializarse.

Ahora bien, a pesar de las retóricas de inclusión que desde el Ayuntamiento califican a los extranjeros como «nuevos madrileños», al finalizar el periodo de cobertura de los planes, los resultados no podrían ser menos halagüeños. Todos los indicadores muestran un creciente aumento de la desigualdad entre la población española y la extranjera: los migrantes sufren invariablemente mayor movilidad laboral, mayor temporalidad (más de la mitad tienen un contrato temporal, frente a menos de un tercio de los españoles), mayores tasas de desempleo (un 16,46 % a principios de 2009, frente al 9,34 % de los españoles) y, por supuesto, salarios entre un 20 y un 35 % menores que los españoles para el mismo tipo de empleo.

Y todo esto en una atmósfera en la que, a escala europea, cada vez es más perceptible el aumento del racismo institucional (véase la mal llamada «directiva de retorno», las modificaciones introducidas por el nuevo gobierno de Berlusconi o el proyecto de la nueva Ley de Extranjería española), así como la utilización de los discursos securitarios abiertamente antiinmigrantes como moneda electoral (Sarkozy, Berlusconi, Merkel...) y la proliferación de episodios de racismo popular (como los incendios en campamentos de rumanos en el sur de Italia). En este sentido, no deja de sorprender la aparente miopía tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, que si bien en principio apostaron por un cierto principio de igualdad (entendida como el acceso a las mismas oportunidades que el resto de los madrileños) y de normalización (evitar la generación de dispositivos o prestaciones segregados de los que existen para el conjunto de la ciudadanía), finalmente han optado, en su propia evaluación de los resultados obtenidos, por limitarse a una simple cuantificación de las actuaciones realizadas. La falta, sin embargo, de cualquier análisis serio de su incidencia social real, desdeña los mecanismos de segregación socioeconómica y deja por completo de lado todo análisis cualitativo del proceso de integración y convivencia real.

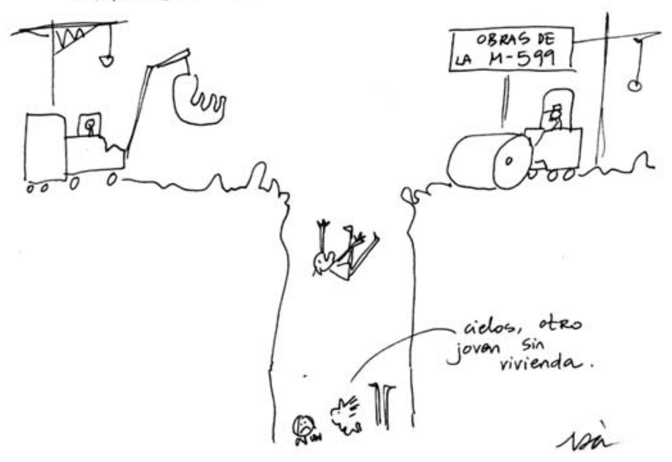
En cualquier caso, conscientes o no de la ineficacia de estos planes —que en público merecen una «positivísima» valoración—, lo cierto es que en los dos últimos años se ha emprendido una política de cierres, reducciones de plantilla y cambios en las entidades gestoras. Es el caso de los 18 CASI integrados en el Plan Madrid, de los que hoy en día sólo quedan dos en funcionamiento, o de algunos dispositivos recogidos en el Plan de Convivencia del Ayuntamiento. Escuelas de formación, programas de acogida, de atención jurídica o los servicios de mediación intercultural (este último, con una trayectoria de más de once años a sus espaldas) han cerrado sus puertas en los últimos meses. Otros recursos se han librado del cierre, pero no así de reducciones de presupuesto y plantilla: así, por ejemplo, el Servicio de Traducción e Interpretación ha quedado limitado a ser un mero *call-center,* mientras que en el Observatorio de las Migraciones, las áreas de

investigación y de participación y coordinación han quedado reducidas prácticamente a la nada. Evidentemente, los cierres o traspasos de estos dispositivos implican un claro derroche de tiempo, dinero público y capital humano materializado en infraestructuras, formación de profesionales y creación de redes sociales.

De otra parte, el nuevo contexto de crisis económica parece que va a acusar aún más estas tendencias. A medida que aumentan las desigualdades sociales y se repiten los llamamientos a «apretarse el cinturón», los riesgos económicos se van transfiriendo cada vez más a los estratos más bajos de la escala social. ¿Cuál es por tanto la lógica que subyace a estas actuaciones del gobierno autonómico y municipal? ¿Se trata de una mera reducción presupuestaria? ¿Tal vez de cambios en las entidades gestoras destinados a favorecer a las ONGs más «afines»? ¿Quizás, simplemente, cunde la insensatez generalizada?

En las últimas décadas, el ámbito de la intervención social, al igual que el de la educación o la sanidad, ha sido terreno abonado para una progresiva generalización de formas de gestión público-privada dominadas por la «lógica de mercado». La gestión de los recursos tanto del Plan Madrid como del Plan de Convivencia ha sido subcontratada a todo un abanico de ONGs, fundaciones y empresas sociales con unas condiciones laborales de absoluta precariedad: salarios bajos, contratos a tiempo parcial, inestabilidad laboral, subcontrataciones a través de empresas o consorcios, etc. De hecho, la consolidación del proceso de externalización ha conducido a una proliferación de organizaciones y asociaciones que compiten ferozmente entre sí. El Tercer Sector se ha convertido, de este modo, en un mercado de saldos. Todo lo cual redunda, como es natural, en una merma no sólo de las condiciones de trabajo sino también de la calidad de las prestaciones. En un mercado en el que sólo se valora el presupuesto más bajo, son las empresas de servicios (bajo la máscara de fundaciones o ONGs) las que acaban por quedarse con los principales contratos; se fomenta así la rápida concentración del sector al tiempo que se convierte también en otro nicho de negocio más.

En definitiva, por más que Comunidad y Ayuntamiento se enorgullezcan en presentar en términos triunfalistas lo que se han atrevido a llamar el «Modelo Madrid» de políticas migratorias y de convivencia, lo cierto es que, más que a un modelo, la realidad parece responder a unas políticas públicas que funcionan al albur de pequeños acuerdos, urgencias y necesidades concretas y no siempre previstas. Iniciativas en clave de ensayo y error: pequeñas actuaciones, móviles y flexibles, dirigidas allí donde se detectan riesgos (coyunturales o estructurales), para hacer frente a necesidades concretas (entre las que también se encuentran las electorales y propagandísticas). El coste es evidente y catastrófico: la intervención social va dejando de lado sus funciones relativas a la protección social y a la redistribución de recursos para convertirse en un «muro de contención» frente a situaciones cada vez más extremas.


MADRID: LA SIMA DE TODOS.
OBRAS DE LA M-599
cielos, otro joven sin vivienda.

IV. Territorio metropolitano.
Auge y caída del ciclo inmobiliario

Diez años de *business* inmobiliario

De cómo el sector de la construcción ha sido, por decreto legal, dueño y señor del territorio de la Comunidad de Madrid, contando para ello con todo el dinero público y las infraestructuras de que ha requerido.

Durante toda una década el uso intensivo del territorio ha sido el factor clave del crecimiento económico madrileño. En el periodo 1993-2003 el suelo comprometido para su desarrollo urbanístico aumentó un 49 %, una cantidad equivalente, nada más y nada menos, que a la mitad de lo que ha crecido Madrid en toda su historia. Un gran número de municipios de la Comunidad ha duplicado sus dimensiones y algunos han multiplicado su tamaño cuatro, seis e incluso diez veces. La fiesta del desarrollo urbano ha llevado las expectativas de crecimiento a amplios espacios de la región antes considerados periféricos o que habían permanecido completamente al margen de las dinámicas metropolitanas como las Sierras Norte y Oeste, las Vegas del Sureste y el límite sur de la región. La explosión urbana de Madrid se ha trasladado incluso a las provincias vecinas (Segovia, Ávila, Guadalajara y Toledo) todas ellas ahora a tiro de AVE. Todavía en 2008, y ya al

borde de la crisis inmobiliaria, el número de viviendas previstas (¡un millón en España!) mostraba una inamovible confianza en la capacidad de generar plusvalías a través del simple mecanismo de construir más casas y estimular el endeudamiento de la población.

Como era de prever esta explosión urbana ha sido directamente fomentada mediante políticas basadas en el incremento de la oferta de suelo. Políticas amparadas invariablemente en el argumento de que la causa del encarecimiento del suelo era su escasez y que la solución a tal problema se encontraba en la liberalización del mercado. Y efectivamente, la Ley del Suelo autonómica aprobada en 2001, heredera de la ley estatal de 1998, y conocida como la «ley del todo urbanizable», establecía la clasificación de todo el suelo de la Comunidad como urbanizable a menos que hubiera una ley sectorial (de Aguas, de Montes, etc.) que determinara la necesidad de protegerlo. Sobra decir que esta política de liberalización como supuesto remedio a la carestía de la vivienda ha sido pura ilusión. De hecho su resultado ha sido precisamente el contrario. Mientras duró la bonanza, a más suelo y más viviendas mayor precio.

Pero la colonización del territorio madrileño no sólo se ha apoyado en una «legislación liberal», también ha tenido que recurrir —paradojas del (neo)liberalismo— al desarrollo de grandes infraestructuras de comunicación. Todas ellas sufragadas con dinero público y todas ellas realizadas por las grandes constructoras, al tiempo que sobre préstamos a las principales entidades financieras. Sin duda todo un «progreso», que ha convertido a Madrid en la ciudad europea con mayor número de kilómetros de autovía por millón de habitantes (un total de 1.000 además de otros 200 más previstos). De este modo, se ha podido incrementar la velocidad motorizada, aun a costa de irse a vivir más lejos debido a que los espacios centrales resultan cada vez más caros.

Algunas de estas operaciones (curiosamente las más ambiciosas) han sido aprovechadas por los principales agentes empresariales de la ciudad: ¿cómo renunciar a

que la ciudad a la que tanto benefician estos «campeones globales» no les proporcione también algún aliciente, algún regalo? Nos referimos, obviamente, al llamado «Centro dotacional Cuatro Torres» (convertido posteriormente en CTBA: «Cuatro Torres Business Area» según su propia página web). Una feliz ampliación del *skyline* de Madrid con cuatro grandes rascacielos, a su vez sedes sociales de grandes entidades corporativas, y orgullo de la nueva condición global de la ciudad. Ante esta nueva imagen de postal para Madrid (que ya no necesitará de los «toros y flamencas de las Ventas»), pocos deberíamos recordar que este complejo se levantó, mediante una extraña recalificación, sobre al antiguo suelo deportivo que albergaba las instalaciones del Real Madrid. Una modificación nimia (de uso de dotacional a terciario lucrativo), que sin embargo llevó aparejada la consiguiente revalorización de los terrenos, así como sustanciosas plusvalías que permitirían saldar la deuda histórica del club de fútbol. Pero esto dista de acabar aquí, simultáneamente, dichas instalaciones se trasladaron a unos terrenos cercanos al aeropuerto, a su vez comprados a precio rústico, que comprendían lo que en un futuro casi inmediato se iba a convertir en un desarrollo residencial de lujo (Valdebebas). El beneficiario, como no podía ser de otra manera, no ha sido sólo el Real Madrid, sino especialmente la empresa de su antiguo presidente, ACS, que además de construir algunas de las nuevas torres, también construirá el nuevo barrio de Valdebebas, colindante con la nueva ciudad deportiva.

En este mismo capítulo se deberían también mencionar la construcción de los túneles de la M-30 (realizada por cuatro grandes constructoras, endeudando al municipio para los próximos 30 años), la M-45 (por la que todos los días la Comunidad paga un «peaje en la sombra» a bancos y constructoras), los próximos desarrollos en el solar del Estadio del Calderón (de orden similar a los del Real Madrid) o la ambiciosa Operación Chamartín. Esta última tan espectacular que merece un breve comentario. Pensado sobre suelo mayoritariamente público, este proyecto pretende la construcción de al menos 16.000 viviendas, 10 ó 12 grandes rascacielos y la prolongación en 2,8 kilómetros

del principal eje de la ciudad: el Paseo de la Castellana. Las plusvalías generadas (y previstas en 8000 millones de euros) por una operación realizada masivamente sobre suelo público, serán por descontado revertidas al sector privado.

No pensemos, de todos modos, que se ha tratado sólo de promover ambiciosas obras de infraestructuras y grandes polígonos de vivienda. También se han emprendido numerosas operaciones de reforma y embellecimiento de la ciudad, se han construido edificios emblemáticos y se ha fomentado las artes, la cultura y el deporte. Así, por ejemplo, la candidatura olímpica de Madrid, o los distintos planes de «revitalización del centro», o la conversión de la Gran Vía en el nuevo «Broadway madrileño» (gracias a los nuevos Music Halls), o las licencias de apertura de 24 horas para algunos grandes centros comerciales del centro.

De hecho, parece que la inversión pública y privada volverá con ímpetu renovado al centro de Madrid. Efectivamente, en el actual contexto de crisis y a causa de las restricciones del crédito necesario para acometer grandes operaciones urbanísticas (que siempre precisan de un fuerte desembolso previo en obras de infraestructura y largos plazos de amortización) probablemente vamos a asistir a un renovado interés por los centros urbanos y sus planes de regeneración. Planes que en el caso de Madrid recogen tanto iniciativas paralizadas durante años (como la remodelación del Paseo del Prado, las construcciones eclesiásticas en el muy disputado Parque de la Cornisa de Las Vistillas, la reforma del mercado de La Cebada, etc), como futuras «revitalizaciones» (plan de reforma de la Gran Vía, área Pez-Luna o calle Hortaleza) o incluso operaciones de «limpieza de agujeros negros» promovidas por empresas privadas.

Se trata del sonado caso «triBall», promovido por una empresa que recientemente adquirió gran número de propiedades en una de las zonas de peor fama de Madrid (Ballesta-Luna-Desengaño) con el propósito de atraer población de mayores recursos y un comercio «chic». Obviamente esta operación «gentrificadora» se ha ejecutado en plena connivencia con el mismo Ayuntamiento.

De hecho, en esta zona se ha realizado la primera implementación extensiva de cámaras de CCTV en las calles de Madrid (antes recluídas exclusivamente a la Plaza Mayor). De esta forma, lo que objetivamente es un urbanismo securitario y excluyente, que más recuerda a una maniobra militar que a una práctica de regeneración urbana, ha quedado recubierto por una sofisticada campaña de «marketing», que ha convertido una de las zonas más lumpen de la ciudad, el Triángulo de Ballesta, en triBall: un barrio de compras y moda para pijos y pseudoalternativos aburridos.

Se podría seguir desgranando *ad nauseam* el rosario de actuaciones que muestra la «inteligencia» urbanística de nuestras administraciones. Pero a fin de no recargar más esta exposición, mencionemos aquí sólo algunos ejemplos del nuevo deporte de la Comunidad: la construcción de un mini-campo de golf en uno de los pocos espacios libres en el centro de la ciudad (el parque del Canal), el destino de tierras dedicadas a la investigación agrícola a la construcción de otro campo en Alcalá de Henares o la extensión de la fiebre del *green* a distintos espacios protegidos de la región: ¿o es que los campos de golf no son, al fin y al cabo, espacios verdes?

En muchos casos, estas actuaciones, que difícilmente se podrían acoger a un planeamiento serio, se han realizado de forma improvisada y a golpe de silbato. De hecho, el «normal hartazgo» de la presidenta por los «pequeños» escándalos de corrupción que han salpicado la región (y que llevaron a la dimisión del Director General de Urbanismo en 2006) y el anuncio de la molesta crisis, que seguramente detendría la buena marcha del negocio inmobiliario le ha llevado a promulgar la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Una ley extraña, que además de no permitir a los forestales madrileños «espiar» en las fincas de la familia Aguirre (es obvio que los grandes propietarios no son propensos a los delitos ecológicos), impuso una limitación de cuatro alturas para la nueva edificación en toda la Comunidad. El propósito declarado de no afear el entorno con altos edificios (ya se sabe que sólo son chulos cuando superan

las 30 alturas) coincide, sorprendentemente, con una fuerte intervención a favor de los intereses de los propietarios de suelo, que aseguran un nada desdeñable aprovechamiento a costa de un urbanismo disperso. Pero no sólo eso, el modelo de las cuatro alturas «aparece» (y ya es casualidad...) en un momento en que el negocio inmobiliario comenzaba a dar señales de agotamiento. Se trata de una limitación que obliga a ajustar todos los planes pendientes de aprobación, con lo que se ralentiza su incorporación al proceso urbano, en clara línea de tendencia con la nueva contracción del ciclo inmobiliario. Por último, no es tampoco irrelevante la aparente presentación de las medidas como un urbanismo «moderado» que no busca el «lucro», tratando de lavar la dañada imagen del urbanismo madrileño, mientras una nueva ley de suelo, más liberal aún que la anterior, no pudo ser llevada a cabo por la aprobación de la ley del suelo estatal en 2007: ¡lástima!

De todas formas, el gobierno autonómico no ha estado solo en su intento de echar una mano al sector de la construcción en estos tiempos difíciles: también el Estado ha puesto su granito de arena. Además de promover una nueva ley hipotecaria que fomenta el endeudamiento para la compra de segundas residencias, el gobierno ha optado por favorecer la vivienda de protección oficial como típico recurso anticícilico ante la caída generalizada del mercado inmobiliario y lo ha hecho estableciendo ayudas directas a los promotores que quisieran recalificar su stock de viviendas como VPO en régimen de alquiler. Además ha flexibilizado los criterios para optar a esta calificación (como los precios máximos) con el propósito de dar salida al enorme excedente acumulado de nuevas construcciones. Pero que nadie piense que se acusa al gobierno de no perseguir un fin social justificado: tal y como se señala en la exposición de motivos de la nueva ley hipotecaria, «la vivienda supone la mayor parte del patrimonio de las familias y por tanto debe ser protegido»; donde «protegido» quiere decir que su valor debe conservarse aun a costa de que los que no tienen casa tengan que renunciar a ello o pagar hipotecas de por vida con salarios miserables. Tal es la virtud de la financiarización y del «exceso» patrimonial de las familias.

La crisis del urbanismo metropolitano

De cómo los «nuevos barrios» nacieron muertos y de cómo municipios y hogares descubrieron de pronto que el endeudamiento generalizado y creciente tenía un límite...

¿Qué resultados ha dejado esta década larga de desarrollo ininterrumpido? Acostumbrados a los bosques de grúas, a la rápida construcción de nuevos barrios, a los flamantes corredores de autopistas que atraviesan la comunidad, el paisaje de Madrid parecía haberse adaptado a la perfección a ese universo social de pequeños propietarios, cuya más acabada expresión sería el *green* y el chalé unifamiliar. Ejemplo paradigmático de este nuevo modelo urbano es el de los nuevos barrios de Madrid, los PAUs, conjunto de ambiciosas operaciones en la periferia del municipio que han agotado el suelo vacante del mismo con la construcción de 200.000 nuevas viviendas (algunas aún en fase de proyecto): alojamiento potencial para más de 500.000 personas

No obstante, en esta perfecta huida de la ciudad y de lo urbano, del mestizaje y la imprevisibilidad que implica vivir en una aglomeración de sujetos distintos y heterogéneos, hay sin embargo una pérdida de la que nadie habla. Poco se dice, en efecto, del número de horas de coche que una vida así implica; de la soledad y el aislamiento que se producen en estos lugares. Pocos estudios existen todavía del tipo antropológico que se constituye en esta perfecta sociedad de propietarios, la debilidad, el raquitismo y la pobreza de una ecología social que se limita al trabajo, al ocio dirigido y a la vida privada en el interior de una vivienda tan rígidamente separada de la ciudad.

En cualquier caso, la crisis no se ha limitado simplemente a las relaciones sociales que los nuevos espacios urbanos pudieran generar. Antes bien, la crisis está adquiriendo los perfiles nítidos de un dinero que se ha gastado

y que en tiempos de contracción económica, será mucho más difícil de recuperar. Si durante estos años, los ayuntamientos y la comunidad podían invertir en infraestructuras, «regalar» dinero a espuertas a constructoras y promotoras, y confiar aún así en que el crecimiento proporcionaría nuevas entradas fiscales, la coyuntura actual es bien otra. Sin movimientos de compra-venta de suelo y sin obras, los municipios hace ya tiempo que han dejado de ingresar. Y como a las familias que creyeron invertir al comprar una vivienda por encima de sus posibilidades, lo único que queda ahora es la deuda. Así el valor de los intereses de una ciudad de buen tamaño como Alcorcón alcanza el 45 % de su presupuesto, mientras que en un municipio como El Álamo supone el 86 %.

Pero, en un contexto de crisis, ¿qué otra cosa pueden hacer estos municipios más que intentar trasladar una parte de sus problemas a los ciudadanos? Ya sea a través de la subida de impuestos o de una nueva ronda de destrucción del patrimonio público (suelo, empresas y servicios) la víctima será, una vez más, el interés general. Pero que nadie se apure, todo apunta a que lejos de cuestionar la ausencia de herramientas para la gestión democrática del territorio que evidencian las numerosas barbaridades urbanísticas cometidas, los desmanes van a ser premiados con más financiación en forma de transferencias estatales bajo la figura del Fondo de Inversión Local. ¿La trampa? Esta medida no está pensada para pagar las deudas que acumulan muchos ayuntamientos, aliviando la situación de proveedores y demás víctimas del impago público, sino para emprender nuevas obras que se hayan podido suspender por la crisis. ¡Viva la insistencia! la cuestión clave es de nuevo mantener el ciclo. Desde luego, de todos los municipios altamente endeudados, es Madrid el que merece, debido a su importancia, más atención. Gracias a las grandes obras realizadas en los últimos años y especialmente a la nueva red de túneles de la remodelación de la M-30, la deuda de Madrid era a principios de 2009 de 5.936 millones de euros, es decir, casi 2.000 euros por habitante, un 44 % más que hace sólo cuatro años. Es significativo que las entidades bancarias ingresen cada día 750.000 euros en concepto de intereses sobre la deuda madrileña.

Parquímetros, impuestos sobre la recogida de basuras y sobre todo «mucha, mucha austeridad» parecen constituir el programa de salida del agujero. Pero obviamente, la austeridad sólo debe dejarse notar en inversiones poco rentables, como los servicios sociales, los equipamientos de barrio o los presupuestos de las bibliotecas. De hecho, las privatizaciones en Madrid capital han sido tan importantes en estos años que igual ya no queda mucho por vender. Desde la privatización de los servicios funerarios (precursora allá por el año 1992 y que causó, según la sentencia judicial emitida dieciséis años más tarde, un «daño a los intereses públicos» de casi ocho millones de euros), se han privatizado total o parcialmente la mayor parte de los servicios públicos dependientes de las Juntas de Distrito (polideportivos, centros culturales, casas de baños, bibliotecas, etc.), se han «vendido» 15 equipamientos (fundamentalmente deportivos), y alrededor de 359.175 m^2 de suelo (sólo entre 2000 y 2007). Aparte se han «remodelado» varios mercados municipales (con la introducción de supermercados, usos «complementarios» privados e incluso, en algunos casos, viviendas), convertidos en ocasiones en mercados de *altstanding* (como el de San Miguel) y se han cedido 50 parcelas públicas para colegios concertados.

La ciudad sostenible

Donde se cuenta cómo se envenena el aire y se despilfarran los recursos naturales de todos para el beneficio de unos pocos

Al tiempo que Madrid se convertía en un monstruo, una suerte de octupus urbano con muchos más de ocho brazos, la proliferación del discurso de la sostenibilidad encontraba eco institucional, incluso cuando se trataba de los mayores desmanes. Pero lo cierto es que Madrid «marca verde» no ha engañado, ni siquiera a los más dispuestos. Durante la década gloriosa de crecimiento ininterrumpido los atentados ecológicos se han sumado sin pausa.

En términos estrictamente territoriales, el desarrollo urbano y la construcción de infraestructuras han ido fragmentando cada vez más la geografía natural hasta reducirla a un conjunto de islas que conservan la etiqueta de «naturaleza» más en calidad de parques urbanos que de espacios naturales. Ejemplos, demasiados. Proyectos absolutamente ilegales (con sentencias judiciales en contra) que acaban saliendo adelante, como el desdoblamiento de la M-501, conocida como la Carretera de los Pantanos y que ha abierto definitivamente la Sierra Oeste a la urbanización, con crecimientos previstos de hasta el 1.000 % en algunos municipios. O la futura radial de la A-6, la M-62, todavía en fase previa, pero que necesariamente partirá en dos algunos de los parques naturales del pie de monte serrano. O las autovías que van componiendo, en el extremo del área metropolitana, una suerte de M-60 encubierta. O las obras del AVE a Valladolid. O el enterramiento bajo el Monte del Pardo de la M-50. O las 100.000 viviendas previstas en la Sierra…

Y por supuesto, en tiempos de crisis el ritmo de construcción no debe ser interrumpido; antes al contrario, es ahora cuando los «prejuicios ecologistas» deben ser eliminados en aras de un «bien mayor»: estimular de nuevo el crecimiento. En palabras de la presidenta, y siguiendo las teorías de un ilustre invitado de la FAES: «La población es más importante que el planeta». Por ello, los estudios de impacto ambiental y las reservas relativas a la contaminación tendrán que pasar a un lugar aún más secundario. En efecto, ya se está preparando el terreno para una nueva ola de desarrollo inmobiliario que pueda compensar la pérdida de negocio que acarrea la crisis. De ahí que, mientras se resienten los presupuestos de educación, sanidad y servicios públicos, para 2009 esté previsto un nuevo crecimiento de la inversión en infraestructuras, especialmente en autopistas (un 16 % más que en 2008) y en el AVE (un 21,5 % más que en 2008).

De otro lado, la actitud de desprecio institucional hacia la protección del medio ambiente y su afán por convertir los valores naturales en un activo más para los negocios se han manifestado de la forma más aguda en la política de

desprotección del principal pulmón de la metrópolis: la Sierra de Guadarrama, garantía de la calidad de su aire y sus aguas. La conquista, largamente esperada, de su declaración como parque nacional ha sido, de hecho, una victoria envenenada. Los sucesivos planes de ordenación de recursos de estos dos últimos años, lejos de proteger la Sierra parecen querer convertirla en un gran parque metropolitano, un decorado con vistas a las urbanizaciones de unifamiliares que se desperdigan por sus faldas. Para comprobarlo, basta mencionar algunos elementos del último de los planes aprobados, como la reducción de la superficie protegida (especialmente la de máxima protección), la introducción de un urbanismo «regulado» en zonas hasta ahora protegidas por otras leyes o la autorización de actividades difícilmente compatibles con una política seria de conservación (pesca, caza, tala). Todo ello acompañado de una estrategia de marketing que vende la Sierra como «atracción verde» para aquellas familias con posibles que quieran instalarse en el «campo».

La misma actitud de desprecio por la conservación del poco patrimonio natural que sobrevive en un espacio sobresaturado de infraestructuras se ha dejado notar también en las políticas de privatización y externalización de los dispositivos de prevención y conservación. Es el caso del cuerpo de bomberos forestales, los retenes de verano o la previsible privatización del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), amén de la reducción de competencias de los guardias forestales.

Pero ¿acaso es este modelo infinitamente reproducible? ¿Cómo puede mantenerse una ciudad que aspira a una incesante reproducción ampliada? Hay ya daños y costes tan evidentes que no se pueden negar. Por considerar un tema especialmente preocupante, Madrid es una de las ciudades de la Unión Europea con mayor índice de contaminación atmosférica, derivada tanto de la fuerte intensidad de su tráfico como de las calefacciones. Como es sabido, todos los veranos y todos los inviernos saltan los niveles de las estaciones de medición alertando de la superación de los umbrales aceptables para la salud.

Invariablemente el protocolo del Ayuntamiento consiste en callar primero, luego negar y más tarde «recomendar no hacer deporte al aire libre», aunque la UE y la OMS exijan en estos casos la inmediata interrupción del tráfico. Ozono, nitratos de azufre, óxidos de nitrato y micropartículas de ceniza son, todos ellos, potentes agentes cancerígenos, causantes de centenares de miles de cuadros alérgicos, de extraños asmas infantiles y, de forma cada vez más reconocida, de centenares de muertes prematuras.

De otro lado, en lo que al abastecimiento de agua se refiere, el límite parece haberse sobrepasado ya con creces. El llamado déficit hídrico es noticia cada verano. Y cada verano se barajan las más peregrinas «soluciones»: explotar los acuíferos e inyectarles agua en épocas de abundancia, bombardear las nubes con yoduro de plata para que «llueva a gusto», construir nuevos embalses tanto en Madrid como en la vecina Guadalajara... Obviamente nadie habla de los 33 campos de golf de la Comunidad que consumen tanta agua como medio millón de habitantes o de los nuevos desarrollos urbanísticos dispersos en los que sólo el mantenimiento de la presión de la red consume tanta agua como el municipio de Madrid. Esto no debe ser tocado. Es mejor pensar en la privatización del Canal de Isabel II, aunque esta empresa pública sea completamente rentable, y en abordar la extensión del sistema de abastecimiento para dar cobertura a la demanda generada por los nuevos municipios y sus respectivos desarrollos, que sólo en 2009 supondrán una inversión de 135 millones de euros.

Del mismo modo, poco se piensa sobre la situación energética de la Comunidad. En un territorio caracterizado por una enorme dependencia exterior (que ronda casi el 100 %) y por un consumo en continuo crecimiento (un 91 % en los últimos trece años, del que casi el 70 % se deriva del petróleo) y mientras que algo más de la mitad del consumo energético (el 52 %) se debe al sector del transporte, la política territorial sigue girando en torno a la construcción de nuevas infraestructuras viarias y favoreciendo la urbanización dispersa, que generará una mayor necesidad de desplazamientos. Eso sí, se sigue

promoviendo el discurso de lo sostenible haciéndonos a todos responsables del «despilfarro y el derroche», fomentando la ética ciudadana con consejos de ahorro energético, al tiempo que en el sureste de la Comunidad, donde ya están las graveras, las grandes depuradoras y la incineradora, se planifican hasta siete centrales térmicas para hacer frente a la creciente demanda energética. De hecho, en todo este capítulo se debería reconocer que al lado de todas las geografías de la desigualdad que se han descrito en este texto, hay otra más, la geografía ecológica. Una geografía en la que el Norte y el Oeste, las grandes concentraciones suburbanas, disfrutan todavía de un paisaje verde y un aire aparentemente sano (si bien ambos cada vez más degradados). Y una geografía en la que el Sur y el Este tendrán que conformarse con los paisajes industriales, tan familiares en su historia, así como con las nuevas infraestructuras de desecho del metabolismo urbano.


FALTA AÑO.
Hola everyone
MADRID2016
¡MADRID!
El sueño de todos está cada vez más cerca.
Club Madrid 16
Patrocinadores Preferentes Madrid 16
Patrocinadores Madrid 16
FALTA AÑO.
Hola everyone
MADRID2016
¡MADRID!
El sueño de todos está cada vez más cerca.
Club Madrid 16
Patrocinadores Preferentes Madrid 16
Patrocinadores Madrid 16

V. La crisis que viene

Durante los últimos años, la entera región madrileña se ha transformado por el impacto combinado de su ventajosa incorporación a la globalización, una espiral de crecimiento y especulación inmobiliaria que parecía no tener fin y una administración agresiva y dispuesta a diseñar la ciudad a su antojo. Los costes de lo que hemos llamado «modelo Madrid» parecen evidentes a la luz de todo lo dicho. La ciudad ha experimentado una profunda dualización social, entre aquéllos beneficiados por las «oportunidades económicas» del nuevo contexto metropolitano, y aquéllos que han tenido que conformarse a la nueva situación de empleos precarios, deterioro de los servicios públicos y endeudamiento generalizado. A su vez, la estructura económica se ha costrificado en favor de los beneficios de la oligarquía corporativa, al tiempo que se perdía una década preciosa para reinvertir los jugosos beneficios obtenidos en cimentar una economía más sostenible, mejorar la calidad de vida de los madrileños, aumentar el acceso a renta y expandir los servicios públicos. Por último, el nuevo modelo se ha basado en una acelarada destrucción de los bienes «comunes», como la sanidad, la educación y el territorio. La pendiente de este proceso de destrucción ha derivado así en una «ecología social» cada vez más frágil y en una progresiva privatización de las bases de la vida (la reproducción, el espacio público, el medio ambiente, etc.), destruyendo las conquistas sociales de décadas y aumentando los umbrales de riesgo de la mayoría.

Conviene insistir en que este modelo se ha gestado no a partir de una mera «inhibición» del Estado, como si fuera la conclusión natural de la libertad de mercado, sino que ha sido el producto, al menos parcialmente, de las políticas de unas administraciones (tanto Aguirre como anteriores) activas y agresivas. Su presunto «liberalismo» no sólo ha requerido fuertes dosis de intervención pública, a través de la legislación y de la permanente transferencia de dinero público a unos pocos, sino también el ensayo de ciertas formas de producción de sociedad y de hegemonía social: la expansión de un imaginario individualista y competitivo; un «tonto el último» en la explotación de recursos. Una oposición seguidista e incapaz, o más bien la falta de oposición, frente a la mirada atónita de la mayoría, han hecho el resto.

Éste es el escenario en el que ha hecho su aparición el fantasma de la crisis. Y es también el marco que nos permite comprender por qué el vertiginoso crecimiento experimentado por la región madrileña en poco más de una década, lejos de haber permitido avanzar algunas iniciativas para afrontar la época de vacas flacas, sitúa a la región en una posición particularmente vulnerable. Ninguna de las administraciones públicas —estatal, autonómica o municipal— ha querido hacer frente al hecho de que un crecimiento basado en el sector inmobiliario y la construcción, y financiado gracias a unos niveles de crédito nunca vistos, era una apuesta de riesgo que más tarde o más temprano iba a terminar en batacazo. En el caso de la Comunidad de Madrid, la caída se está dejando notar con particular dureza en la destrucción de empleo, la amenaza de bancarrota para los hogares endeudados, las políticas de austeridad que amenazan con recortar aún más el exiguo gasto social y el torpedeo constante de unos servicios públicos ya bastante maltratados y cuya privatización es entendida como una posibilidad de seguir alimentando las cuotas de beneficio de la oligarquía local.

Tampoco parece que la crisis vaya a traducirse en ningún cambio de orientación del modelo. Antes al contrario, probablemente ahondará en una nueva oleada de privatizaciones

y de políticas pro-crecimiento. Pero no cabe duda de que la apisonadora deja tras de sí escombros y ruinas en forma de corrupción, espionajes y bandidaje especulativo. Incluso la hegemonía inquebrantable de la administración Aguirre ha empezado a dar síntomas de debilidad. En efecto, escándalos judiciales, casos flagrantes de corrupción, malversación de fondos... han dejado al descubierto las redes clientelares y de interés que verdaderamente sostienen la arquitectura del poder en Madrid. De momento, las cadenas de mando del PP, el más puro estilo «aguirrista», han vuelto a defenderse atacando, pero quizás estemos asistiendo a la primera crisis institucional de envergadura.

De otro lado, la crisis y los graves riesgos de fractura social que conlleva pueden abrir posibilidades para un verdadero cambio de rumbo. Una constelación de pequeños conflictos, resistencias y malestares anuncian que la crisis es también una oportunidad de politización. Así las luchas de los hipotecados y los desahuciados pueden colocar en primer plano la necesidad de un derecho real a la vivienda. Las luchas por la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos pueden promover debates sobre un nuevo sentido de lo público y de defensa de lo común frente a la predación privada. Las luchas por el territorio pueden verse fortalecidas en sus argumentos ante la hecatombe del sector inmobiliario. El paro y la escasez de trabajo, incluso precario, pueden provocar reacciones insospechadas ante el modelo laboral flexible de esta estructura económica. La pérdida generalizada de renta puede promover formas colectivas de hacer frente a las necesidades comunes. Y, por supuesto, los migrantes tendrán mucho que decir ahora que se les trata como un «excedente», un resto del que se puede prescindir.

Efectivamente, cuando la insistencia en el modelo anterior es sólo la repetición del mismo reparto injusto de la renta y los recursos, la multiplicación de los conflictos que apuntan al núcleo del modelo de acumulación —vivienda, empleo y derecho a una renta garantizada, sanidad y cuidados, espacios públicos y territorio, derechos de los migrantes— se presenta como el momento crítico para la reinvención del vínculo social. La posibilidad de pensar la crisis como una coyuntura

que deja al descubierto todos los planos que recorren el gobierno de la ciudad global se transforma, de este modo, en la gran oportunidad para reactualizar ese viejo «derecho a la ciudad» que animó las revueltas urbanas de los años sesenta y setenta. El acicate para una apuesta por la innovación de base y en pro de instituciones que sirvan de soporte para el desarrollo de una democracia urbana de nuevo cuño.

Lo que suceda está sencillamente en nuestras manos.

traficantes de sueños